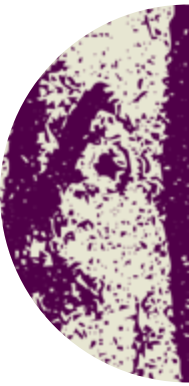




5

**Bosques, pesca,
acuicultura y turismo
como motores
del desarrollo local**



Mensajes clave

Los sectores forestal, pesquero, acuícola y turístico son fundamentales para la diversificación de los ingresos rurales, la generación de empleo en territorios específicos, como las zonas boscosas, costeras y ribereñas, y la integración de las mujeres en las economías rurales.



Los ingresos generados por estas actividades y sus productos, entre ellos, los recursos forestales no madereros o la fauna y flora acuática, son fundamentales para la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, especialmente en las zonas más aisladas.



El sector forestal requiere políticas consistentes y de largo plazo para lograr su pleno desarrollo. Además, el negocio forestal precisa condiciones de financiamiento que tengan en cuenta los largos plazos de crecimiento de los árboles.



La certificación tanto de productos madereros como no madereros les agrega valor y ayuda a mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores del sector.



La acuicultura sostenible ha surgido como un sector dinámico, en el que la región ya está avanzando rápidamente y con un gran potencial para cubrir los aumentos esperados en las demandas de alimentos.

La sostenibilidad de las zonas de pesca de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en declive, siendo el Pacífico Sur la zona que presenta valores más bajos de sostenibilidad. Esto se debe principalmente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y, aunque en menor medida, a los impactos del cambio climático.



Hay una creciente demanda de experiencias de turismo relacionadas con la cultura y la naturaleza. La abundancia de recursos ecológicos y la diversidad cultural de ALC ofrecen una ventaja competitiva a la región en ese sector.



Los principales desafíos para el turismo rural son también las necesidades de la población local. Por ello, sería importante que las inversiones públicas en infraestructura y servicios básicos tengan en cuenta en sus análisis de prioridades y beneficios los potenciales beneficios del turismo.

Bosques, pesca, acuicultura y turismo como motores del desarrollo local¹

Introducción

Las actividades forestales, de pesca y acuicultura muestran menos presencia en las exportaciones, el empleo y el valor agregado de los países de la región que aquellas del sector agropecuario, pero no por eso son menos importantes para las comunidades rurales. Estos sectores proveen empleo local con bajos requerimientos en capital humano y físico, lo que permite la diversificación de ingresos para las comunidades rurales, mientras que proporcionan alimentos, como los provenientes de la pesca y los productos forestales no madereros.

En el caso del turismo, su rol en las economías de la región es más heterogéneo, destacándose los Estados caribeños, para los cuales los ingresos por ese

concepto pueden llegar a representar más del 20 % de su PIB. La creciente demanda en turismo de naturaleza y cultural proporciona a los países la oportunidad de desarrollar el turismo rural, con experiencias que involucran a las comunidades locales.

El capítulo caracteriza estos tres sectores en las economías de América Latina y el Caribe (ALC), destacando su aspecto rural y sus aportes a las economías locales, así como su potencial. El capítulo también analiza las principales oportunidades y desafíos que estos sectores afrontan para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales y brinda recomendaciones de política para el fortalecimiento de estos sectores.

¹ Este capítulo fue elaborado por Guillermo Cabral y Juan Odriozola con la asistencia de investigación de Belén Cañuelo, Delfina Silva y Emilse Vargas.

Sector forestal

El sector forestal maderero se clasifica en cuatro subsectores: 1) silvicultura y extracción de madera, 2) manufacturas de madera, 3) celulosa y papel y 4) muebles de madera.

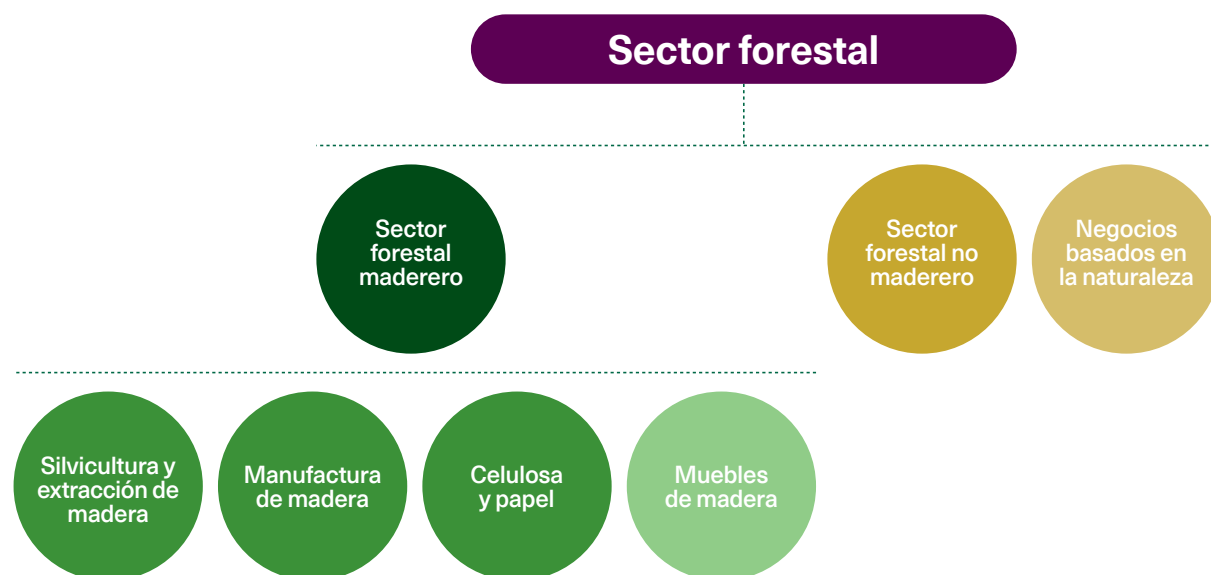
Para los fines de este documento, el “sector forestal maderero” comprende los tres primeros subsectores, salvo que se indique otra cosa. La exclusión del subsector de muebles de madera responde a que su actividad parece estar más concentrada en zonas urbanas y a la carencia de datos desagregados.

El sector forestal no maderero², por su parte, incluye una gran variedad de productos, como nueces, hongos, hierbas, especias, plantas aromáticas, caucho, etc. Su importancia en la economía tiende a ser subestimada por estar mal representada en las estadísticas públicas, dado que gran parte de su comercio ocurre en el sector informal (Sorrenti, 2017).

Los negocios basados en la naturaleza en el sector forestal aprovechan los recursos y servicios de los bosques de forma sostenible para generar ingresos, como es el caso de los créditos de carbono.

Figura 5.1

Diagrama de los subsectores forestales



2 La FAO define a los productos forestales no madereros como “bienes derivados de los bosques que son objetos tangibles y físicos de origen biológico distintos de la madera” (Sorrenti, 2017).

La relevancia del sector forestal en América Latina y el Caribe

La región posee una de las mayores extensiones de cobertura forestal del mundo, con aproximadamente 935 millones de hectáreas (ha) de bosques, lo que representa cerca del 22 % de la superficie boscosa global (FAO, 2021a). No obstante, esta abundancia está acompañada de profundas amenazas. La deforestación, los incendios y el cambio en el uso del suelo, especialmente por la expansión agrícola y ganadera, representan las principales causas de pérdida de cobertura forestal en la región (WRI, 2025). Si bien la tasa de pérdida neta de bosques ha disminuido en algunos países, la degradación continúa siendo significativa, afectando no solo la biodiversidad, sino también los medios de vida de comunidades rurales e indígenas.

ALC contaba en 2022 con aproximadamente 22,5 millones de ha de plantaciones forestales (FAO, 2024d), principalmente de eucaliptos y pinos. Desde 1990 hasta 2022, se observó un aumento del 195 % en la cantidad de hectáreas plantadas en la región, frente a un crecimiento del 71 % a nivel mundial para el mismo periodo. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay concentran el 81 % de las plantaciones de ALC.

● ● América Latina y el Caribe ha sido la región con mayor crecimiento de plantaciones forestales en los últimos 22 años

La distribución de las plantaciones forestales por tamaño de propiedad muestra una concentración en grandes propiedades. Por ejemplo, en Chile, tres grandes empresas (con más de 30.000 ha de plantaciones) tienen el 55,4 % de la superficie plantada; diez medianas empresas (de 5.000 a 30.000 ha) representan el 10,1 %; 683 medianos propietarios (200 a 5.000 ha) poseen el 10,6 %, y 22.830 pequeños productores (menos de 200 ha), el 23,9 % (Banco Mundial, 2020b).

Los datos del censo agropecuario de Brasil de 2017 muestran la cantidad de madera producida (en metros cúbicos [m³]) para distintos fines y por tamaño de establecimiento. En los 99.718 establecimientos menores que 200 ha, se produjo el 29,8 % de la madera; en 4.731 establecimientos de 200 a 2.500 ha, el 25,2 % y en los restantes 779 establecimientos, de más de 2.500 ha, el 45,3 %.

● ● Los países de la región muestran un alto potencial para la silvicultura

Algunos países de la región se caracterizan por altos rendimientos de productividad en silvicultura. Cubbage et al. (2022) lo confirman al medir la cantidad de metros cúbicos de madera producida por hectárea y año (m³/ha/año) para distintas especies de árboles (cuadro 5.1). Los autores calculan la tasa interna de retorno (TIR) de las plantaciones, tomando en cuenta costos de producción y precios de venta. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay muestran un elevado rendimiento, similar al de países asiáticos y superiores a países europeos o a Estados Unidos.

Las perspectivas de crecimiento de la demanda de productos forestales y las ventajas comparativas de algunos países de la región en la producción generan un potencial importante para este sector. Por ejemplo, según la FAO (2022d), la demanda de productos industriales de base forestal hacia 2050 crecerá un 37 %, en su equivalente en madera en rollo (insumo principal de dichos productos), pasando de 2.100 millones de m³ de madera en rollo equivalente a 3.100 millones de m³. El crecimiento de la demanda de productos forestales sostenibles ha hecho, además, que la certificación tenga un rol cada vez más importante (ver el recuadro 5.1).

Cuadro 5.1

Rotación, crecimiento promedio anual y tasa interna de retorno por países y especies, 2022

País	Especies	Rotación (años)	Incremento prom. anual (m ³ /ha)	Tasa interna de retorno (TIR)
China	<i>Eucalyptus sp.</i> (Pingxiang, Guangxi)	6	20,0	28,6
Vietnam	Acacia de pequeños productores (noreste)	7	13,5	26,0
Paraguay	<i>Eucalyptus grandis</i> (clones de urograndis)	12	25,0	22,0
Vietnam	<i>Eucalyptus urophylla</i> (noreste)	7	12,8	21,9
Laos	<i>Tectona grandis</i> (de rápido crecimiento)	18	12,4	21,2
Laos	<i>Eucalyptus sp.</i> (industria)	7	33,0	20,9
Argentina	<i>Eucalyptus grandis</i> (promedio)	13	25,0	20,6
Chile	<i>Eucalyptus globulus</i> (pulpa)	16	25,0	14,9
Uruguay	<i>Eucalyptus smitthii</i>	10	22,0	14,6
Colombia	<i>Pinus tecunumanii</i>	16	28,0	14,2
Chile	<i>Pinus radiata</i> (madera aserrada, suelo bueno)	22	30,0	14,1
Uruguay	<i>Eucalyptus grandis</i> (pulpa)	10	25,0	14,1
Uruguay	<i>Eucalyptus grandis</i> (madera aserrada)	16	27,0	12,4
Chile	<i>Eucalyptus nitens</i> (pulpa)	14	30,0	12,3
Brasil	<i>Pinus taeda</i> (madera aserrada)	21	30,0	11,8
Ecuador	<i>Eucalyptus globulus</i> (4 ciclos de corta)	38	22,0	11,7
Uruguay	<i>Eucalyptus dunni</i>	10	22,0	11,6
Chile	<i>Pinus radiata</i> (pulpa, suelo pobre)	16	20,0	11,5
Ecuador	<i>Tectona grandis</i>	20	18,0	11,4
Colombia	<i>Pinus patula</i> (madera aserrada)	18	18,0	11,0
España	<i>Eucalyptus globulus</i>	12	19,8	10,6
Estados Unidos	<i>Pinus taeda</i> (crecimiento promedio en el sur)	25	11,3	4,8
Finlandia	<i>Picea abies</i>	63	6,5	4,4
Finlandia	<i>Pinus sylvestris</i>	66	7,5	4,2
Polonia	<i>Pinus sylvestris</i> (bosque estatal o privado)	100	9,3	2,9
Estados Unidos	Latifoliadas mixtas, misma edad, plantación	60	6,2	2,9

Nota: Los países y especies están ordenados por la TIR.

Fuente: Cubbage et al. (2022).

Recuadro 5.1

El rol de las certificaciones en el sector forestal

El desarrollo sostenible del sector forestal en ALC depende en gran medida de marcos legales robustos y coherentes que reconozcan los derechos de propiedad, regulen el acceso y promuevan el manejo sostenible de los recursos forestales. En las últimas décadas, numerosos países de la región han reformado sus marcos normativos para alinear sus legislaciones forestales con los principios de sostenibilidad ambiental, participación comunitaria, reconocimiento de los derechos indígenas y sistemas de control de la legalidad.

En este contexto, los sistemas de certificación voluntaria, entre ellos, el del Forest Stewardship Council (FSC), han ganado un rol protagónico como mecanismos que promueven la sostenibilidad forestal y mejoran la trazabilidad en los mercados internacionales. En 2023, más de 7 millones de ha^a estaban certificadas bajo estándares del FSC en ALC, principalmente en Bolivia, Brasil, Chile, México, Uruguay y Perú, países que lideran la región en términos de superficie bajo manejo forestal responsable (FSC, 2025).

La certificación FSC no solo agrega valor a la producción, al facilitar el acceso a mercados especializados (como el de la construcción sostenible y la compra pública responsable), sino que también exige el cumplimiento de estándares sociales, ambientales y laborales, incentivando relaciones más justas con trabajadores y comunidades locales.

En un análisis, Mo et al. (2015)^b encuentran que los beneficios de la certificación superan los costos, estimando los beneficios financieros en USD 6,05 por m³ de producción equivalente de madera de rollo, frente a un costo de USD 3,71 por m³. Los beneficios de la certificación se deben a varios factores, entre ellos, un premio en el precio de venta de la madera; eficiencias operativas ganadas por el mejor planeamiento y manejo de los desechos que implica la certificación; e incentivos tributarios.

La certificación FSC puede ser clave para el cumplimiento de requisitos especiales de ciertas jurisdicciones, como el Reglamento 2023/1115 que la Unión Europea (UE) aplica a productos forestales (ver el capítulo 1). Si bien la certificación FSC no implica un cumplimiento automático del reglamento de la UE, el FSC ha desarrollado un módulo específico complementario para respaldar su observancia. La integración de estas certificaciones en políticas públicas nacionales y regionales podría amplificar sus beneficios, siempre que se acompañen de asistencia técnica, financiamiento inclusivo, trazabilidad adaptada a las capacidades locales y evaluación e implementación de la ecoeficiencia.

En el ámbito de los productos forestales no madereros (PFNM), se ha ido consolidando progresivamente la certificación de la Union for Ethical BioTrade (UEBT), que garantiza que dichos productos se obtengan respetando los principios de conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y condiciones de trabajo éticas a lo largo de la cadena de valor. A diferencia del FSC, que se enfoca principalmente en el manejo de los bosques para la producción maderera, la UEBT está orientada a cadenas de valor de la bioeconomía, muchas veces vinculadas a las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas. Esta certificación ha sido implementada con éxito en países como Brasil, Colombia y Perú, contribuyendo a la formalización de la recolección de PFNM y al acceso de pequeños productores a mercados cosméticos, alimentarios y farmacéuticos de alto valor (UEBT, 2022).

En ese contexto, las mujeres rurales desempeñan un rol clave, ya que suelen poseer un conocimiento altamente especializado sobre árboles y bosques, así como sobre la diversidad de especies forestales, su gestión, conservación y utilización para consumo alimentario, medicinal y energético (RedLAC, 2024; FAO, 2025e). Este saber tradicional no solo es esencial para la sostenibilidad de las prácticas de recolección, sino que también tiene un alto valor estratégico para la gestión y gobernanza forestal (CIFOR e ICRAF, 2013), lo que refuerza la importancia de su participación activa en iniciativas de certificación como la UEBT.

^a De acuerdo con la FAO (2024d), en 2022 había unos 22 millones de ha de plantaciones, por lo que la certificación FSC cubre casi un tercio del total.

^b El documento estudia los casos de once compañías y productores de siete países: Camerún, Colombia, Indonesia, Malasia, Perú, Portugal y Rusia.

Una medición reciente en 62 países³, que representan el 72 % del área forestal del mundo y el 94 % del PIB mundial, indica que el sector forestal maderero tuvo una contribución directa formal de USD 661.000 millones (0,9 % del PIB mundial) a precios constantes de 2015 (FAO, 2022d). Al incluir las contribuciones indirectas, el aporte total asciende a USD 1,52 billones. En ALC, Li et al. (2022) estiman un aporte del sector que asciende a 0,8 % del PIB, como muestra el cuadro 5.2.

Esos cálculos subestiman el valor real debido a la exclusión de los sectores informales de la economía. Con base en datos de tres subsectores del sector forestal maderero (silvicultura y extracción de madera, manufacturas de madera, y celulosa y papel), que incluyen la actividad informal, se obtiene que en Argentina, Chile y Uruguay representan entre el 1 % y el 2 % del PIB respectivo (cuadro 5.2). Tanto en las mediciones de Li et al. (2022) como en los datos obtenidos de las cuentas nacionales se observa que el subsector de mayor valor agregado es el de celulosa y papel.

Cuadro 5.2
Valor agregado del complejo forestal maderero, 2015 (millones de dólares)

Región	Silvicultura	Manufacturas de madera	Celulosa y papel	Muebles de madera	Total forestal	Porcentaje del PIB
África	13.457	2.170	2.651	4.206	22.483	0,9 %
América Latina y el Caribe	10.322	6.996	19.875	8.834	46.027	0,8 %
Asia	81.474	88.984	108.045	59.452	337.955	1,3 %
Europa	30.505	47.188	58.741	48.818	185.252	1,0 %
Norteamérica	29.356	11.402	11.827	6.579	59.165	0,3 %
Oceanía	2.365	3.742	2.636	1.454	10.197	0,6 %
Total	167.479	160.482	203.775	129.343	661.079	0,9 %

Fuente: Li et al. (2022) y Banco Mundial (2025g).

Cuadro 5.3
Valor agregado por subsector forestal maderero según las cuentas nacionales

País	Año	Silvicultura y extracción de madera	Manufacturas de madera	Celulosa y papel	Total
Argentina	2024	0,2 %	0,2 %	0,8 %	1,2 %
Chile	2022	0,4 %	0,7 %	0,6 %	1,7 %
Uruguay	2023	0,6 %	0,2 %	1,1 %	1,9 %

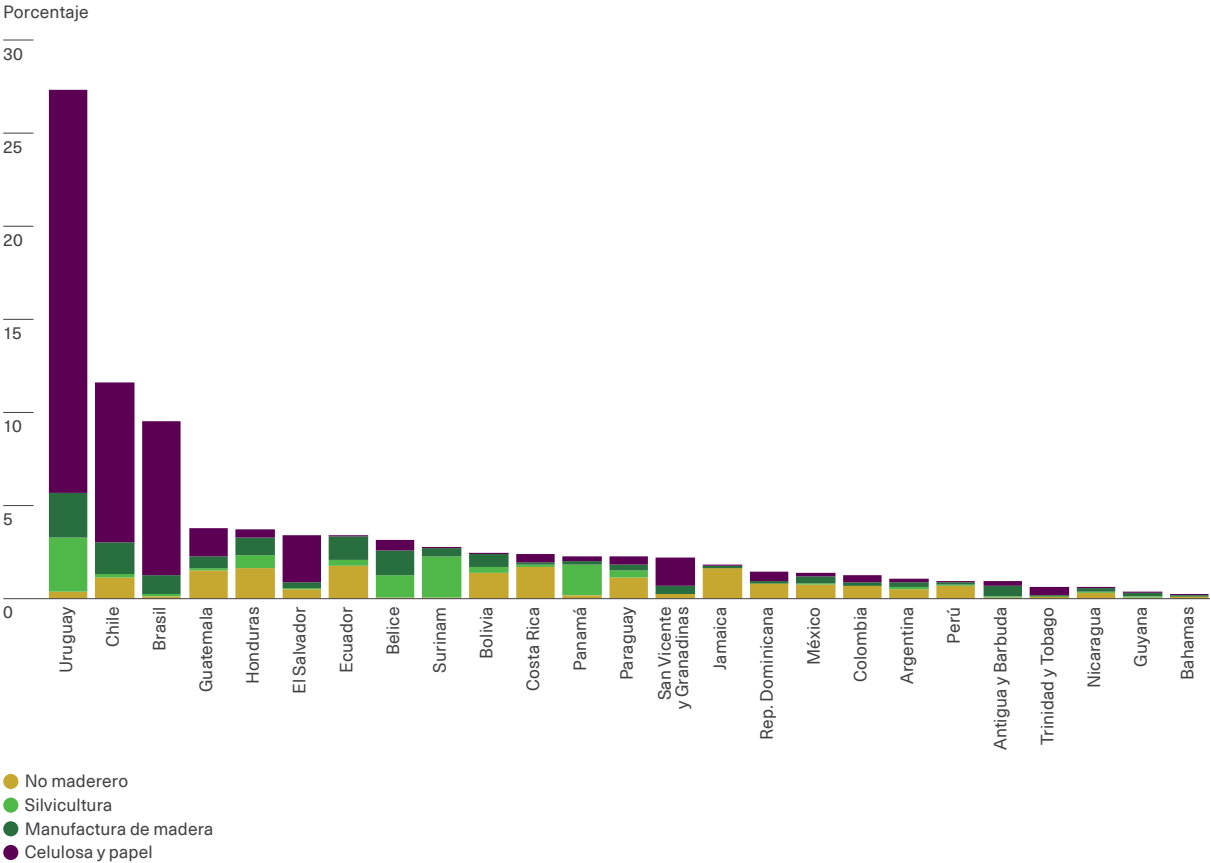
Fuente: Elaboración propia con base en las cuentas nacionales de los países (ver el detalle en el cuadro A.5.1 del apéndice de este capítulo, disponible en la edición en línea del RED).

3 Los países de ALC incluidos en la medición son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

En cuanto a las exportaciones, el sector forestal explica el 3,6 % del total en promedio, con una gran heterogeneidad en la región (gráfico 5.1). En Uruguay, con tres plantas de celulosa de gran porte, las exportaciones del sector forestal representan más del 25 % del total nacional, superando incluso al sector ganadero, de larga tradición en el

país. Brasil y Chile le siguen en orden de importancia, con el 10,5 % y el 9,4 % de las exportaciones totales. Otros países donde las exportaciones forestales representan al menos el 1 % del total son Belice, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Surinam.

Gráfico 5.1
Exportaciones de productos forestales como porcentaje de las exportaciones totales de América Latina y el Caribe, 2023

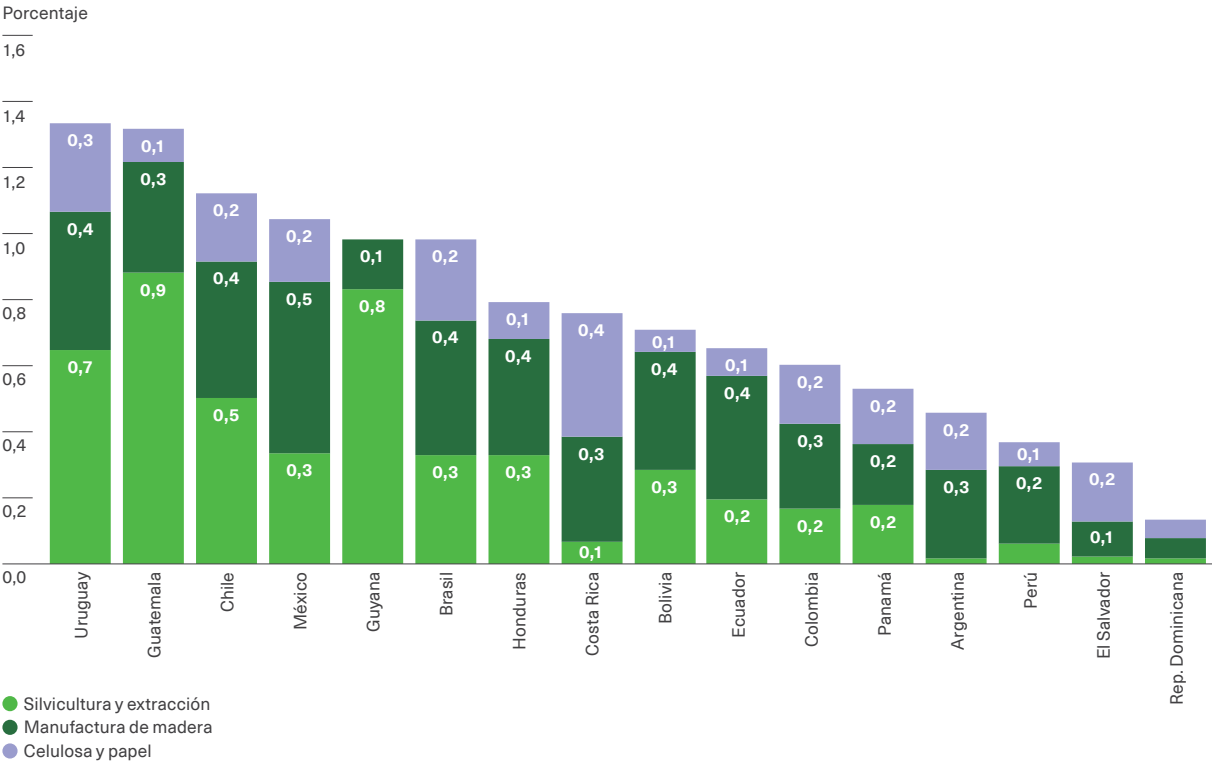


Fuente: Elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas (s. f.b).

Los tres subsectores forestales madereros típicamente rurales contribuyen con aproximadamente el 1 % del empleo total a nivel global (Lippe et al., 2022). La informalidad laboral en el sector es del 77 % en los países para los que se dispone de datos y solamente el 23 % de los empleos forestales son ocupados por mujeres. El empleo femenino es superior en el subsector de la celulosa y el papel (28 %), que también muestra la menor informalidad laboral.

En ALC, se observa que el 0,86 % del empleo total se encuentra en el sector forestal maderero, siendo el subsector de manufacturas de madera el que captura la mayor cantidad de empleos, seguido del de silvicultura y extracción de madera, y el de celulosa y papel (gráfico 5.2).

Gráfico 5.2
Empleo en el sector de producción forestal como porcentaje del empleo total en América Latina y el Caribe



Nota: Se utiliza el último dato disponible para cada país (2024 para México, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Panamá y Perú; 2023 para Uruguay, Guatemala, Honduras, Argentina, El Salvador y República Dominicana; 2020 para Chile, y 2019 para Guyana).
Fuente: Elaboración propia con base en datos de OIT (s. f.).

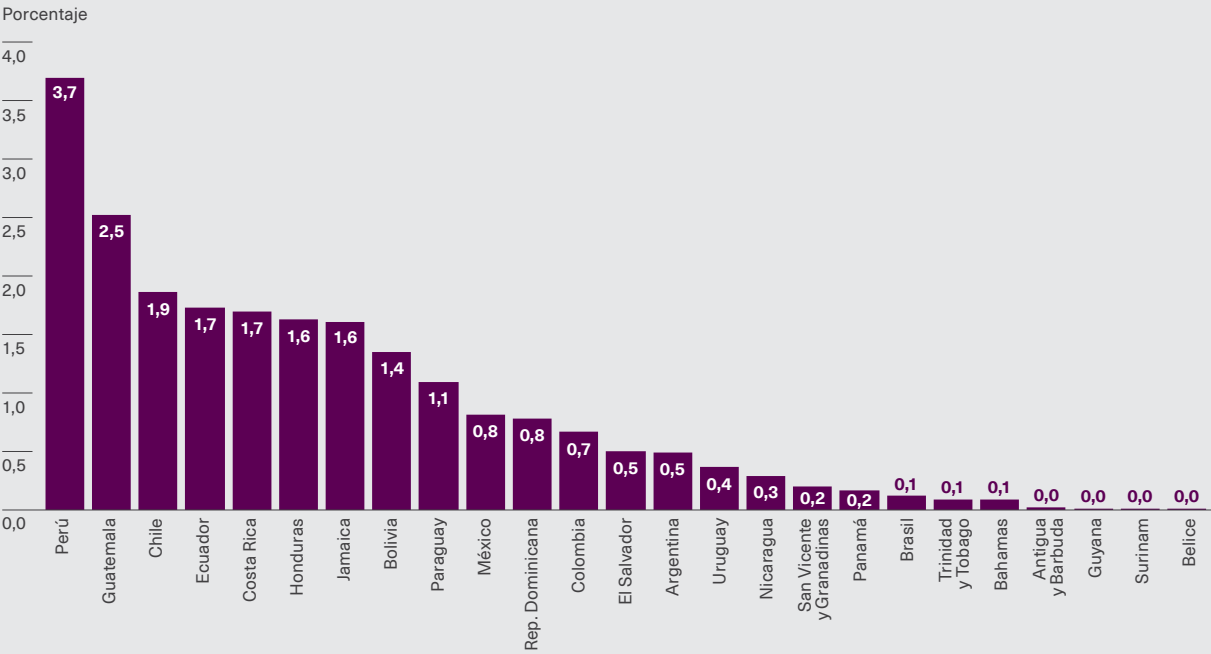
Recuadro 5.2

Productos forestales no madereros

La cuantificación del valor producido por el sector forestal no maderero enfrenta múltiples dificultades, que van desde la propia definición de los productos que deben considerarse, pasando por la falta de medición del consumo de productos que no entran en el mercado, hasta el comercio informal de estos productos y la falta de información estadística estandarizada y comparable. La amplia variedad de productos que pueden ser catalogados como forestales no madereros incluye hongos y trufas, frutos del bosque, frutos silvestres comestibles, jarabe de arce, caucho, hojas, raíces de jengibre, corteza, flores, látex, gomas, resinas, bambú, plantas ornamentales y material de teñido, entre otros.

Sorrenti (2017) identifica varios de estos productos dentro del sistema de clasificación estadística del comercio internacional. El sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas permite mayor detalle y se utiliza para calcular las exportaciones de este tipo de productos. Estos representan el 0,87 % de todas las exportaciones de la región (gráfico 1). Destaca el caso de Perú, con un 3,7 % de las exportaciones totales, debido principalmente a productos como el arándano. Otros países donde este tipo de productos tiene un peso relativamente alto son Guatemala (2,5 % de las exportaciones totales), Chile (1,9 %), Ecuador (1,7 %), Costa Rica (1,7 %), Honduras (1,6 %), Jamaica (1,6 %), Bolivia (1,4 %), Paraguay (1,1 %), México (0,8 %), República Dominicana (0,8 %), Colombia (0,7 %), El Salvador (0,5 %), Argentina (0,5 %), Uruguay (0,4 %), Nicaragua (0,3 %), San Vicente y Granadinas (0,2 %), Panamá (0,2 %), Brasil (0,1 %), Trinidad y Tobago (0,1 %), Bahamas (0,1 %), Antigua y Barbuda (0,0 %), Guyana (0,0 %), Surinam (0,0 %) y Belice (0,0 %).

Gráfico 1
Exportaciones de productos forestales no madereros como porcentaje de las exportaciones totales de América Latina y el Caribe, 2023



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas (s. f.b).

Relacionamiento del sector con la agricultura y otros sectores

Sector agropecuario

La conservación forestal aporta beneficios clave para la agricultura (como la regulación del agua, el control de la erosión, la polinización y la fertilidad del suelo), mientras que la deforestación ha reducido la productividad y la resiliencia de los sistemas agrícolas en ALC. Frente a ello, la agrosilvicultura y los sistemas agroforestales ofrecen una vía estratégica para combinar producción y conservación.

En la región existen experiencias exitosas de integración entre los sectores forestal y agropecuario. En Colombia, el Programa de Incentivos a Sistemas Agroforestales, impulsado por Fedecacao, ha promovido el cultivo de cacao junto con árboles maderables y frutales, mejorando la productividad y disminuyendo la presión sobre los bosques naturales (Castillo Ledesma, 2019). En Honduras y Nicaragua, la Fundación Madera Verde impulsa sistemas silvopastoriles con especies nativas que restauran tierras degradadas, aumentan la captura de carbono y generan productos maderables y forrajeros (Sepúlveda et al., 2020).

Los sistemas silvopastoriles son arreglos agroforestales que combinan plantas forrajeras, como los pastos y hierbas leguminosas, con arbustos y árboles para la nutrición animal y usos complementarios (Murgueitio et al., 2011). Estos sistemas han demostrado múltiples beneficios económicos y ambientales. Chará et al. (2020) analizan diez estudios de casos en Argentina, Colombia y México, que cubren periodos de 10 años de implementación de sistemas silvopastoriles, y encuentran mejoras en las pasturas, un aumento de la producción de leche y carne por hectárea, menores emisiones de GEI por cada 100 kilogramos (kg) de leche o ganado vivo y una mejora del bienestar animal. Los autores encontraron que los beneficios superaron los costos en todas las fincas y que el flujo de caja inicial es negativo, por lo que es clave el financiamiento.

Energía

Cerca del 50 % de la madera producida a nivel mundial se usa para generar energía (FAO, 2018). El sector forestal representa alrededor del 40 % de la energía renovable en forma de biomasa. Se estima que un tercio de la población mundial utiliza energía basada en productos forestales (FAO, 2022a). En el RED de 2024, se muestra que la biomasa representa el 18,4 % de la matriz energética de ALC (Allub et al., 2024).

La biomasa desempeña un papel importante en la descarbonización. Esta materia orgánica puede utilizarse para sustituir el 20 % del combustible consumido en la industria del cemento sin inversiones de capital (Rahman et al., 2016). Además, las cenizas de biomasa podrían reemplazar el 80 % del clínker en el cemento (Campos Teixeira et al., 2020).



El 50 % de la madera producida a nivel mundial se usa para generar energía

La biomasa es, por otra parte, una fuente muy importante de energía para consumo residencial (Allub et al., 2024). En países como Chile, Colombia, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, la leña y el carbón son la principal fuente de energía del hogar (61 % del consumo energético en promedio), superando a otras fuentes como la electricidad y el gas, lo que tiene consecuencias negativas para la salud de los habitantes rurales.

Turismo

Se estima que el 7 % del turismo mundial está basado en la naturaleza (WTTC, 2019).

Costa Rica ha sido citada internacionalmente como modelo de restauración y conservación, logrando

revertir procesos de deforestación acelerada en los años ochenta gracias a sus políticas públicas, como el sistema de pagos por servicios ambientales, la promoción del ecoturismo y el fortalecimiento del

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El país mantiene más del 50 % de su superficie cubierta por bosques y ha logrado combinar crecimiento económico con conservación efectiva (Porras et al., 2013).

Actividades Ilícitas

Uno de los riesgos más persistentes es la deforestación y degradación forestal, impulsada por la expansión agropecuaria, la minería ilegal, la tala no autorizada y la infraestructura no planificada. Esta situación genera impactos ambientales y sociales y debilita la base de recursos sobre la que se asienta el desarrollo forestal sostenible. También amenaza los medios de vida de cerca de 1.000 millones de personas que dependen de los bosques (Lawson y MacFaul, 2010).

Se estima que entre el 15 % y el 30 % de toda la madera que se produce en el mundo viene de la tala ilegal, con un valor que oscila entre USD 51.000 y USD 153.000 millones anuales, afectando de manera importante a la recaudación fiscal (Interpol, 2021). Además, la madera ilegal reduce los precios mundiales entre el 7 % y el 16 % en promedio (Seneca Creek Associates y World Resources International, 2004)



Se estima que entre el 15 % y el 30 % de toda la madera que se produce en el mundo viene de la tala ilegal

En muchos casos, la tala ilegal no es un fin en sí mismo, sino un subproducto de un proceso en el que lo esencial es capturar la tierra para el cultivo agrícola comercial. Esto explica por qué actividades como la tala o la minería parecen tener menor impacto sobre la conversión permanente del suelo, aunque, en realidad, funcionan como precursores clave de su degradación (UNODC, 2025b). En el caso de ALC, alrededor del 77 % de la pérdida de bosques tropicales entre 2013 y 2019 se debió a la agricultura comercial y, de esa cantidad, aproximadamente el 88 % fue ilegal (Dummett et al., 2021).

Países de América Latina y el Caribe con ventaja comparativa en el sector forestal

Casos exitosos: Brasil, Chile y Uruguay

El caso uruguayo es emblemático. En 2024 los productos forestales se posicionaron en el primer lugar de las exportaciones del país, superando al tradicional rubro de la ganadería. El desarrollo del sector tuvo como puntos de partida claves la estabilidad institucional y jurídica, que garantizó la seguridad necesaria para las inversiones a largo plazo, junto con políticas de impulso productivo que trascendieron diferentes gobiernos. La Ley Forestal (Ley 15939 de 1987) dio al sector forestal un tratamiento diferencial respecto a otras actividades económicas en cuanto a incentivos económicos

para la producción primaria, incluyendo exoneraciones impositivas, subsidios para la inversión y mejora en el acceso al crédito. Como resultado de ello, la cantidad de plantaciones forestales ha pasado de menos de 50.000 ha antes de la Ley a más de 1,1 millones en la actualidad (CERES, 2023). La Ley de Zonas Francas (Ley 15921 de 1987) promovió el desarrollo de tres grandes plantas de celulosa en el país. Este modelo es referencia internacional de integración vertical y puede adaptarse a otros contextos de la región siempre que existan marcos legales estables, incentivos de largo plazo y políticas de sostenibilidad.



Bosque de eucaliptos en Río Negro, Uruguay.

En Chile, el desarrollo del sector forestal también se caracterizó por un apoyo importante del sector público, que incluyó políticas de largo plazo con un marco institucional sólido y apoyos económicos por parte del Gobierno. Concretamente, el Decreto Ley 701 de 1974 estableció una serie de incentivos económicos a la actividad forestal, que incluyeron una bonificación para las plantaciones. Esta ley favoreció principalmente a grandes plantaciones, pero fue modificada en 1998 para incluir a pequeños propietarios (Banco Mundial, 2020b).

El sector público también apoyó al sector forestal para la creación del Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable (CERTFOR). Esta certificación, creada en 2002, fue reconocida y homologada por el Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal en 2004.

Brasil tiene una de las tasas de crecimiento forestal más altas del mundo (Cubbage et al., 2022). El crecimiento del sector estuvo apoyado por un conjunto de políticas públicas. En las décadas de 1960 a 1980, el Gobierno federal estableció tres programas de incentivos para la reforestación, que incluyen donaciones de recursos monetarios o de materiales a productores rurales (Bacha, 2008). Estos programas viabilizaron la expansión de áreas reforestadas en 4,3 millones de ha entre 1970 y 1985 (Bacha, 1995).

●● Los programas de incentivo al sector forestal fueron mutando de incentivos fiscales a préstamos a largo plazo y tasas bajas

Los programas de incentivos fiscales federales desaparecieron en los años noventa para dar lugar a incentivos mediante créditos a largo plazo y bajas tasas de interés. De ellos, destaca el Programa PROFLOA del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) (Bacha, 2008).

Casos de alto potencial: Argentina y Paraguay

La tasa interna de retorno de las plantaciones forestales en Argentina y Paraguay superan el 20 %, como se observa en el cuadro 5.1. Sin embargo, estos países no tuvieron un desarrollo similar al de Brasil, Chile y Uruguay. ¿Qué pasó para que no se sumaran a ese crecimiento forestal en el periodo?

Argentina cuenta con aproximadamente 1,28 millones ha de plantaciones forestales (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2024)⁴. Además, dispone de al menos 3,7 millones de ha de tierras forestales para expandir las plantaciones sin que afecten a sitios de alto valor de conservación ni compitan con bosques nativos o con cultivos (Breard et al., 2024).

Las exportaciones de productos forestales se encuentran estancadas en Argentina, con un valor en 2022 de aproximadamente USD 600 millones, similar al de 2013 (Breard et al., 2024). El saldo comercial del país en productos forestales ha sido negativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que posee un importante mercado interno, al que se destinó el 88 % de la producción de tableros (paneles de madera), mientras que en el caso de la celulosa fue el 80 %.

Mora Alfonsín (2023), en su análisis sobre el sector forestal argentino, concluye que la industria forestal del país tiene un gran potencial, pero afronta tres principales desafíos. El primero es el orden macroeconómico, ya que el negocio forestal es de largo plazo y las crisis financieras y económicas, entre las que destaca la suspensión de pagos de la deuda de 2001 y sus efectos en el acceso a los mercados internacionales, impiden un mayor desarrollo del sector. Segundo, lo que el autor llama la “licencia social”, resultado del rechazo de la inversión de Metsä Fibre en Entre Ríos y su posterior instalación en Uruguay, que resultó determinante para el bajo desarrollo forestal. Por último, la disponibilidad de tierras rurales, puesto que la Ley 26737 limita la titularidad extranjera de tierras rurales en Argentina, dificultando la instalación de grandes proyectos que requieran plantaciones propias.

4 La cantidad de hectáreas de plantaciones forestales representa aproximadamente el 0,55 % de la superficie total del país, excluyendo la superficie cubierta por cuerpos de agua interiores.

Recuadro 5.3
Cambios recientes en Paraguay que impulsan el desarrollo del sector

Paraguay ha alcanzado casi 340.000 ha (0,9 % del territorio) de plantaciones forestales. El desarrollo forestal ha sido menor que en países vecinos debido a una falta de acceso al crédito de acuerdo con la actividad forestal, la débil implementación de políticas de incentivos fiscales y financieros, la debilidad institucional, la limitada infraestructura logística, los altos costos del transporte, la ausencia de industrias forestales de gran escala y la Ley N° 515, que prohibía exportar madera en rollo.

En los últimos años se han dado cambios clave. En 2013 se reglamentó el Derecho Real de Superficie Forestal, que permite utilizar el “vuelo forestal” (derecho sobre el volumen de árboles de una plantación forestal) como garantía para acceder a créditos. En 2020 se levantó la prohibición de exportación de madera en rollo para especies exóticas y se creó la Ley N° 6676, que estableció incentivos fiscales para la conservación de los bosques nativos.

La modernización institucional incluyó el Portal de Trámites del Registro Público Forestal, que digitalizó procesos, ofreciendo servicios 24 horas, siete días a la semana, reduciendo la burocracia, permitiendo pagos electrónicos y mejorando la transparencia. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal se fortaleció con tecnología satelital y alertas tempranas de deforestación que mejoraron la capacidad de fiscalización.

La gestión integral de los incendios también se profesionalizó mediante la Ley N° 6818 de 2021 y la creación de la Red de Manejo Integral del Fuego, implementando alertas tempranas, monitoreo, capacitación y equipos especializados para bomberos y técnicos forestales.

El financiamiento ha sido históricamente un desafío, especialmente para pequeños productores, aunque la banca estatal ha creado líneas de crédito especiales para el sector.

Destaca también el papel que juegan los grandes proyectos, como la instalación de plantas de celulosa, impulsando la demanda sostenida y de gran escala de materias primas, la inversión, la generación de empleo de calidad y la transferencia de conocimiento y tecnología.

El Instituto Forestal Nacional ha emprendido la formulación de la primera política forestal nacional, con un enfoque sostenible que combina conservación y productividad. Con ella, se busca impulsar las plantaciones forestales, la industrialización responsable y el empleo rural digno. Además, promueve la provisión de bienes y servicios forestales, aumentando el valor agregado y la competitividad, asegurando la resiliencia de los ecosistemas forestales y gestionando estratégicamente los incendios, las plagas, los cauces hídricos y la biodiversidad, asegurando la provisión futura de productos madereros y no madereros y los servicios ecosistémicos que estos brindan.

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista a Cristina Goralewski, presidenta del Instituto Nacional Forestal (Infona) de Paraguay, realizada específicamente para este reporte.

En el caso de Paraguay, la evolución del sector forestal se caracteriza por un crecimiento constante hasta 2020, año a partir del cual mostró una aceleración. De unas 50.000 ha de plantaciones forestales existentes en 2010 (Davis et al., 2024), se pasó a 204.631 ha en

2022 (Infona, 2023a). Al cierre del año 2024, la superficie total de plantaciones forestales se estimó en 340.000 ha, una expansión impulsada por el proyecto de la planta de celulosa Paracel principalmente y otros

proyectos privados⁵. Solamente Paracel plantó más de 25.000 ha en 2024 en tierras propias (Paracel, 2025).

El Instituto Nacional Forestal de Paraguay estima que existen unos 5,9 millones de ha con potencial “alto” o “muy alto” para plantaciones forestales (Infona, 2023b). El cálculo se basa en criterios biofísicos, de accesibilidad, logística, mercado, demanda y socioeconómicos.

Una primera limitación a la expansión del sector en Paraguay fue la Ley N° 515 de 1994, que prohibía la exportación de madera en rollo de cualquier especie. Esta ley fue modificada en el año 2020 (Ley N° 6616), manteniéndose la prohibición solamente para

especies forestales nativas y permitiéndose para especies provenientes de plantaciones forestales exóticas, incluidos el eucalipto y el pino.

Davis et al. (2024) señalan algunos factores que explicarían el poco desarrollo relativo del sector forestal paraguayo, como la complejidad logística, por tratarse de un país mediterráneo, los procesos burocráticos largos, el marco regulatorio complejo, la posibilidad de conflictos en la titularidad de la tierra y los riesgos de incendios altos. Masiero y Massarenti (2023) junto con Breard et al. (2024) analizan el sector forestal paraguayo y, entre los desafíos que encuentran, destacan problemas institucionales que generan solapamientos y superposiciones de funciones.

Oportunidades de desarrollo y políticas forestales

El negocio forestal es de largo plazo y por ello requiere de políticas de largo plazo y seguridad jurídica. Los países exitosos muestran un conjunto de políticas consistentes y estables en el tiempo. Esto incluye instituciones nacionales específicas para el sector que velen por su desarrollo, seguridad jurídica y agilidad administrativa, así como marcos regulatorios claros y políticas nacionales de fomento del sector. Es importante también revisar leyes claves que puedan frenar el sector, como se ve en los casos de Argentina y Paraguay.

Se precisan también políticas de apoyo financiero o préstamos acordes al sector. El negocio forestal requiere préstamos que posterguen pagos parciales de capital o intereses hasta el final de la operación (de 8 a 15 años). La banca privada no ofrece necesariamente este tipo de préstamos, por lo que el sector público

tiene un rol de apoyo al financiamiento. Estos estímulos deben considerarse con cuidado, pues el sector tiende a mostrar una alta concentración en grandes explotaciones y los subsidios podrían llevar a una concentración de fondos públicos en pocas manos.

Las certificaciones deben fomentarse como una herramienta para acceder a mejores mercados y agregar valor a la producción. Los gobiernos pueden facilitar el acceso a las certificaciones, especialmente entre pequeños productores. En la región, hay algunos casos de éxito, como el CERTFOR en Chile y el INFONA, en alianza con FSC, en Paraguay.

Igualmente, se podría facilitar el acceso de más plantaciones al mercado de créditos de carbono como un ingreso adicional que las fomente. Los nuevos mercados de carbono permiten obtener recursos para



Acción CAF.
Escanea el QR para conocer más sobre el impacto CAF en el sector forestal.

⁵ En 2024 se concretó el Silvipar Astarte Impact Forestry Fund (SAIFF), un fondo de inversión con USD 325 millones, para la plantación de unas 60.000 hectáreas. El proyecto contó con apoyo financiero de CAF. Se puede obtener más información en la página web <https://www.silvipar.com/post/astarte-capital-partners-and-silvipar-ab-close-inaugural-impact-forestry-fund-at-325m>

la conservación, forestación y reforestación (ver el recuadro 5.4). Estos recursos podrían ayudar a financiar proyectos forestales y generar empleo en áreas de conservación. Sin embargo, para proyectos forestales a pequeña escala, los mercados de carbono no siempre cubren los costos que conlleva verificar las capturas y los costos de transacción de comercializar los bonos, por lo que los gobiernos podrían tener un espacio de acción para facilitar el acceso a estos mercados.

Finalmente, habría que fomentar la integración del sector forestal con otros sectores, como la silvicultura, por sus beneficios económicos y ambientales. La combinación de las plantaciones con otros sectores es posible y potencialmente beneficiosa en términos económicos, ambientales y sociales. El caso de los sistemas silvopastoriles podría ser importante en los países del Cono Sur, altamente productivos en el sector forestal y ganadero.

Recuadro 5.4

Créditos de carbono

Los créditos de carbono^a son una fuente de ingresos adicional para alivianar las barreras financieras que enfrenta el sector forestal. En el mercado voluntario de carbono, el 36,8 % de los créditos de carbono emitidos hasta la fecha fueron resultado de la implementación de actividades de conservación y evitación de la deforestación (REDD por su sigla en inglés), así como de actividades de reforestación (plantaciones forestales) pertenecientes a la categoría de soluciones basadas en la naturaleza (Climate Focus, 2025b).

En 2024, cinco países de América Latina y el Caribe estuvieron entre los mayores aportantes de proyectos que generan este tipo de acciones de mitigación (REDD y de reforestación): Brasil, Colombia, Guyana, México y Perú (Climate Focus, 2025a).

Para el caso particular de las actividades de reforestación, el esquema de mayor aplicación y éxito en la región ha sido el denominado “sombriлла” o “agrupación de proyectos”. Este consiste en agrupar diferentes plantaciones forestales como una sola iniciativa de mitigación, de manera que permita cubrir los costos de generación de los créditos, garantizando una rentabilidad mínima para todos los participantes del proyecto. Este esquema ha sido adoptado por la gran mayoría de los programas voluntarios de carbono presentes en la región (Verra, GS, Cercarbono, Biocarbon, etc.) y goza de prestigio y confianza como una alternativa técnica y financieramente viable para integrar a los pequeños reforestadores en esquemas de mercado de carbono a un bajo costo.

Es importante mencionar también que, a pesar de los beneficios ambientales, sociales y financieros derivados de los créditos de carbono, las actividades provenientes de iniciativas del tipo REDD no han estado exentas de críticas. Publicaciones de prensa a nivel regional (por ejemplo, La Silla Vacía) e internacional (como The Guardian) han cuestionado la integridad de los resultados de mitigación obtenidos, aduciendo que la mayoría de estos proyectos REDD no han generado el impacto indicado (Greenfield, 2023) al sobreestimar sus potenciales de mitigación y omitir el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, así como al incurrir en prácticas de doble contabilidad de los beneficios para una misma zona geográfica. Esto tuvo un efecto negativo en el mercado voluntario de carbono, lo que afectó no solo a los proyectos de REDD, sino a todos los tipos, incluyendo las actividades de reforestación (que no recibieron ningún cuestionamiento por integridad), y resultó en una caída significativa de las emisiones de créditos de carbono a partir de 2021. Sin embargo, múltiples organizaciones, tanto del norte global (IC-VMC, IETA, VCMi, etc.) como del sur global (CAF, FSC-Indigenous Foundation), han defendido este mecanismo y desarrollado y promovido estrategias para mejorar y garantizar su integridad, impacto, institucionalidad y transparencia, reactivando el interés de los sectores productivos en su uso para la compensación de sus emisiones de GEI y recuperando la confianza en él.

^a Por este término se conocen los certificados negociables que representan la reducción o eliminación de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) liberadas a la atmósfera.

La pesca y la acuicultura

La importancia de la pesca y la acuicultura para América Latina y el Caribe

La pesca y la acuicultura constituyen actividades importantes para el ingreso, el empleo y la alimentación de poblaciones rurales costeras de ALC. Este sector tiene un gran potencial de crecimiento, dadas las proyecciones de incremento demográfico, su consecuente aumento en la demanda mundial de alimentos y el desarrollo de la acuicultura sostenible a nivel global. La acuicultura de la región ha pasado de representar el 2,6 % de la producción mundial en el año 2000 a alcanzar el 4,6 % en 2022 (cuadro 5.4), un crecimiento liderado principalmente por el fuerte aumento de la acuicultura marina (FAO, 2024b). Brasil, Chile y Ecuador, como líderes regionales en este sector, concentran casi el 80 % de la producción acuícola de ALC y se sitúan entre los 15 mayores productores mundiales (FAO, s.f.b).

● ● América Latina y el Caribe ha sido la región con mayor crecimiento de la acuicultura en los últimos 25 años

La contribución de la pesca y la acuicultura al valor agregado nacional varía ampliamente en la región, aunque en la mayoría de los países representa una porción modesta del producto total (gráfico 5.3). Por ejemplo, en Perú, donde la pesca ha sido tradicionalmente importante para la economía, estos sectores (incluyendo el procesamiento industrial) representaron alrededor del 0,3 % del valor agregado nacional en 2024. En el caso de Chile, la pesca y la acuicultura rondan el 0,5 % del PIB, contribución pequeña comparada con la minería, pero significativa en términos de encadenamientos productivos y desarrollo local.

El valor agregado por tonelada (t) de producción en ALC tiende a ser alto en comparación con otras regiones, dado el énfasis en especies de alto valor comercial (camarón, salmón y langosta, entre otros). De hecho, América Latina se ubica como la segunda región del mundo en valor promedio por kilo producido, solo detrás de Oceanía (De las Mercedes Jaime Muñiz y Jimber del Río, 2025). Esto refleja la calidad y el precio de los productos latinoamericanos en el mercado global y evidencia oportunidades para seguir mejorando el valor agregado mediante el procesamiento y certificaciones de origen sostenible.

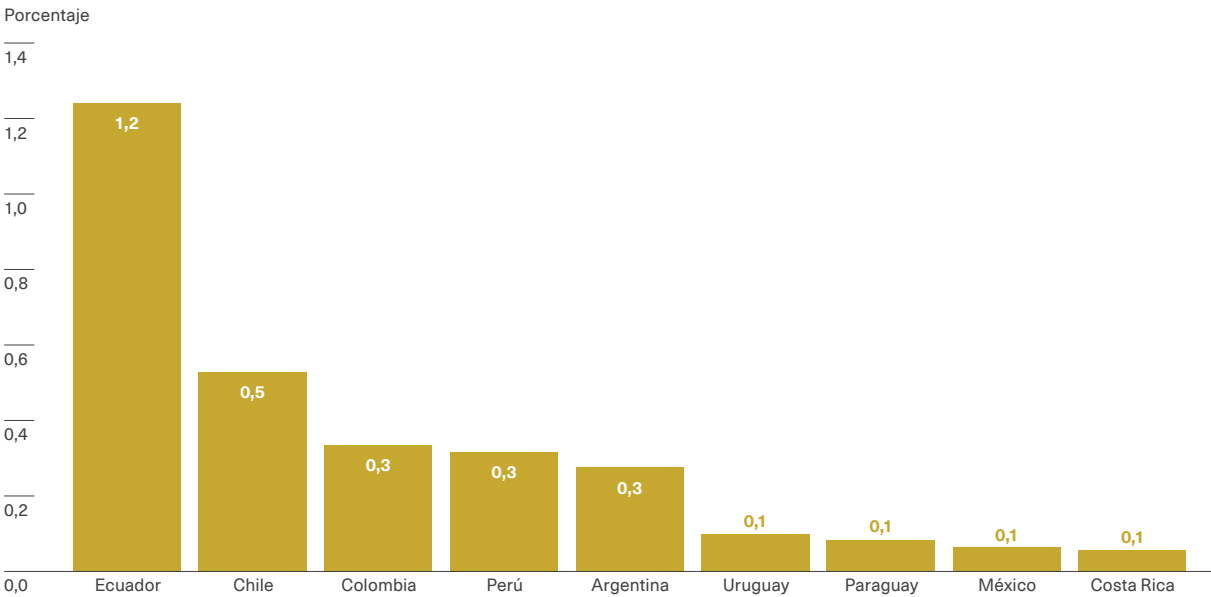
Más de 2 millones de personas trabajan en la pesca y la acuicultura en la región (FAO, 2024b). El gráfico 5.4 muestra la participación de ambas actividades en el empleo de los países de ALC. La poca participación en países como Perú y Chile, que tienen una gran industria, se explica en parte por la baja intensidad en el uso de mano de obra en la pesca industrial y por el subregistro del empleo pesquero. El gráfico 5.5 muestra, a partir de datos de encuestas de hogares, la proporción del empleo en la pesca que corresponde a la pesca rural. Se observa cómo los países con mayor presencia de pesca industrial muestran valores relativamente bajos, en el entorno del 20 % y el 30 %, mientras que, en países como Colombia, El Salvador o Panamá, la pesca rural representa entre el 60 % y el 80 % del empleo en el sector.

Cuadro 5.4
Producción de la acuicultura por región

	África	América Latina y el Caribe	Norteamérica	Asia	Europa	Oceanía	Mundo
2000	399.622	838.939	584.495	28.422.489	2.052.889	121.824	32.420.258
2022	2.316.825	4.313.508	644.547	83.399.172	3.503.440	235.231	94.412.723
Participación en 2000	1,2 %	2,6 %	1,8 %	87,7 %	6,3 %	0,4 %	
Participación en 2022	2,5 %	4,6 %	0,7 %	88,3 %	3,7 %	0,2 %	

Nota: Los valores de producción se expresan en miles de toneladas, equivalente en peso vivo.
Fuente: Elaboración propia con base en FAO (2024b).

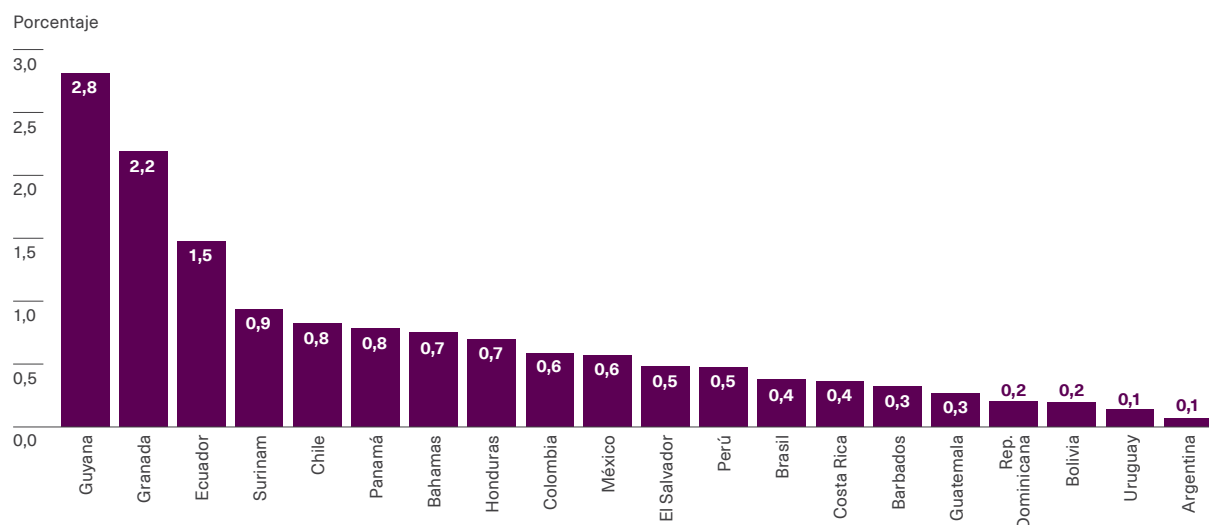
Gráfico 5.3
Participación de la pesca y la acuicultura en el valor agregado total en países de América Latina
y el Caribe, 2023



Nota: Los datos no distinguen entre pesca y acuicultura, por lo que la cifra representa el total agregado de ambos sectores.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de las cuentas nacionales de los países (ver el detalle en el cuadro A.5.1 del apéndice de este capítulo disponible en la edición en línea del RED).

Gráfico 5.4

Participación de la pesca y la acuicultura en el empleo total en países de América Latina y el Caribe



Nota: Los datos no distinguen entre pesca y acuicultura, por lo que la cifra representa el total agregado de ambos sectores. Se toma el último dato disponible para cada país (2025 para México; 2024, para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay; 2023, para Barbados, El Salvador, Granada y Guatemala; 2020, para Chile; 2019, para Bahamas y Guyana; y 2016, para Surinam).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de OIT (s. f.).



Más de 2 millones de personas trabajan en la pesca y la acuicultura en la región

En términos de salarios, el gráfico 5.6 muestra que existe una gran heterogeneidad en la región. En los países de América del Sur, el salario de la pesca y acuicultura rural está generalmente por debajo del promedio rural, con la excepción de Perú, mientras que en Centroamérica se observa una heterogeneidad mayor, con salarios que cercanos al promedio rural total.

Gran parte de estas cifras, basadas en encuestas y registros oficiales, subestiman el empleo relacionado con la pesca, dado que no incluyen a personas que trabajan en etapas de poscaptura. En este sentido, se estima que, por cada persona registrada en la pesca o acuicultura, hay hasta tres empleos adicionales en actividades vinculadas (procesamiento, transporte, comercio, etc.) (Flores-Nava, 2019).

Muchos de esos empleos secundarios ocurren en zonas rurales o pequeñas ciudades pesqueras, fortaleciendo las economías locales. Mujeres de comunidades costeras a menudo trabajan en el procesamiento artesanal del pescado (limpieza, fileteado, secado) o en la venta en mercados locales, integrándose así a la cadena de valor. De hecho, entre el 40 % y el 90 % de los puestos de trabajo posteriores a la captura (como los de procesamiento y comercialización) son ocupados por mujeres en ALC (Flores-Nava, 2019), lo que subraya el rol clave que desempeña la pesca para su inclusión económica (ver el recuadro 5.5).

Adicionalmente, la pesca artesanal suele tener un efecto de red de seguridad en el empleo rural. La pesca artesanal opera como un “seguro” de autoempleo y alimentación para agricultores o silvicultores familiares en épocas en las que las cosechas agrícolas son inferiores a lo esperado, los precios caen o no se está en época de zafra (Coomes et al., 2010).

Gráfico 5.5
 Proporción de la pesca y la acuicultura rural en el empleo pesquero total en países de América Latina y el Caribe, 2003-2023



Nota: Los datos no distinguen entre pesca y acuicultura, por lo que la cifra representa el total agregado de ambos sectores.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).



Comunidad pesquera caribeña en Maracas Bay,
Trinidad y Tobago.

Gráfico 5.6
 Salario horario de la pesca y la acuicultura rural relativo al salario horario promedio rural
 en países de América Latina y el Caribe, 2003-2023



Nota: Cada valor representa el cociente del salario horario de la pesca y acuicultura rural entre el salario horario promedio rural. Los puntos ausentes se explican por la carencia de datos en las encuestas de esos años. Los datos no distinguen entre pesca y acuicultura, por lo que la cifra representa el total agregado de ambos sectores.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Recuadro 5.5

Mujeres rurales y pesca artesanal en América Latina y el Caribe

Las mujeres rurales de comunidades costeras y ribereñas tienen una presencia histórica y activa en la pesca artesanal de ALC. Su trabajo abarca toda la cadena de valor, desde la captura y recolección, donde las mujeres representan en promedio el 25 % de la fuerza laboral pesquera regional, hasta el procesamiento poscaptura (limpieza, fileteado, salado, ahumado y secado), la manufactura, la preparación de alimentos y la comercialización directa. También participan en la elaboración y reparación de redes de pesca, en el turismo comunitario y en la acuicultura artesanal (Guedes et al., 2021; Nobre y Hora, 2017; Quesada et al., 2023).

Estas mujeres enfrentan barreras estructurales que limitan su autonomía y el reconocimiento de su trabajo. La pesca es tradicionalmente percibida como una actividad masculina, lo que excluye a las mujeres de los marcos legales y de la gestión pesquera, además de dificultar su acceso a derechos formales, a créditos y a medios de producción, como embarcaciones o motores para estas. Otra limitación que enfrentan es la presencia de intermediarios en las cadenas de valor, lo que genera dependencia y reduce sus márgenes de ganancia.

Además de su importante rol económico en las etapas poscaptura, cumplen un papel clave en la protección ambiental. Se las reconoce como cuidadoras del agua y del territorio y se involucran en la protección de los humedales y los manglares, en proyectos de educación y protección ambiental, en el monitoreo de fuentes hídricas y en la denuncia de amenazas vinculadas a actividades extractivas o contaminantes (RedLAC, 2023).

Fuente: Elaborado con base en RedLAC y CAF (2025).

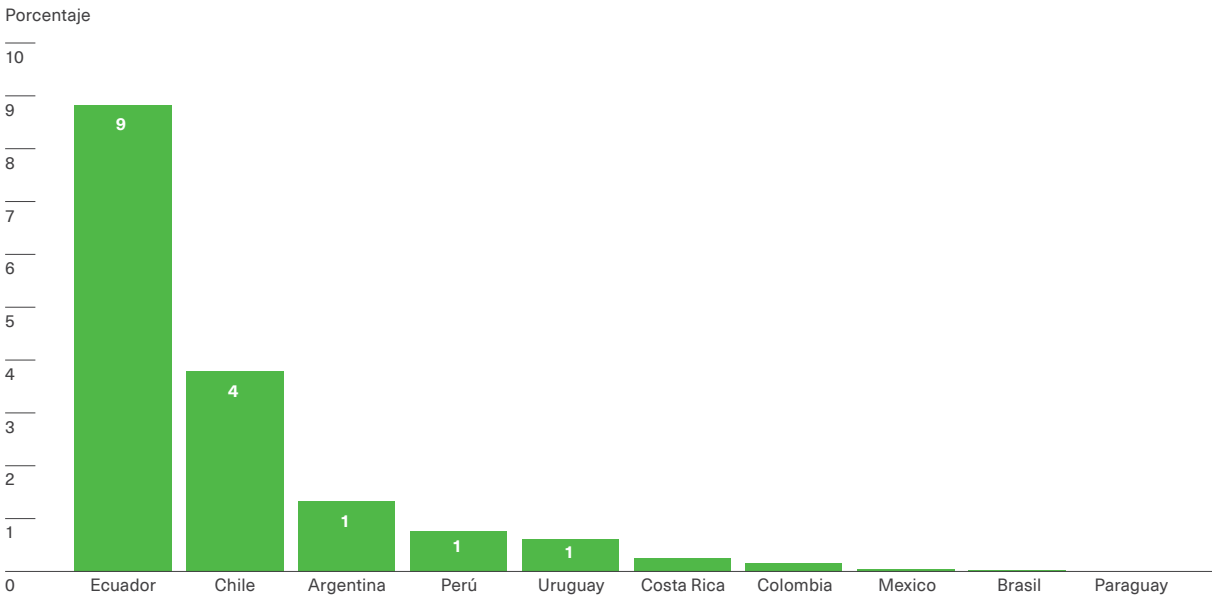


Las mujeres rurales tienen una fuerte presencia en las etapas poscaptura y cumplen un rol clave en la protección ambiental

El sector pesquero contribuye a las arcas públicas y a las economías nacionales de diversas formas, incluyendo la generación de divisas por exportaciones, el pago de impuestos, derechos y licencias, y el canon por acceso a los recursos. El gráfico 5.7 muestra la participación de la pesca y acuicultura en las exportaciones de los países de ALC. Entre ellos, destaca Ecuador, donde, gracias al desarrollo de su acuicultura, las exportaciones de este subsector y la pesca representan casi el 9 % de su valor agregado.

La comercialización de los derechos de pesca y licencias también genera ingresos a los países. Estos cobran tarifas por otorgar permisos de pesca comercial (por ejemplo, cuotas de anchoveta bajo subasta en Perú, licencias de flotas industriales en Chile, etc.), cuyos ingresos van al gobierno central. Asimismo, ciertos países obtienen ingresos mediante su registro de bandera de naves pesqueras. Sin embargo, el diseño de estos sistemas puede generar externalidades negativas relacionadas con la pesca ilegal, no declarada o no regulada (CLALS American University e InSight Crime, 2022).

Gráfico 5.7
Participación de la pesca y la acuicultura en las exportaciones totales en países de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Los datos no distinguen entre pesca y acuicultura, por lo que la cifra representa el total agregado de ambos sectores.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNCTAD (2025b).

Ejes económicos de la pesca latinoamericana y caribeña

En conjunto, cinco países representan el 90 % del volumen y valor de las exportaciones de la pesca y la acuicultura de la región. Chile y Ecuador encabezan la lista, aportando cada uno cerca de un tercio del valor exportado regional y más de un cuarto del volumen; en el caso de Chile, principalmente gracias a sus exportaciones de salmón, trucha y mejillón y, en el de Ecuador, por sus exportaciones de camarón de cultivo y atún. Les sigue Perú, que aporta el 11 % del valor exportado y 20 % del volumen, mientras que Argentina y México representan aproximadamente el 8 % y 6 % del volumen y el 6 % y 5 % del valor exportado, respectivamente (FAO, s.f.b).

● ●
En conjunto Chile, Ecuador, Perú, Argentina y México representa el 90 % del volumen y el valor de las exportaciones de la región

En Chile los productos del mar son el segundo rubro de exportación después de la minería. Solo en 2023, las ventas de salmón y trucha representaron el 6,7 % de las exportaciones totales chilenas (Santander Trade, 2025). En Ecuador, el camarón lidera las exportaciones no petroleras y su acuicultura ha impulsado al país entre los principales exportadores mundiales de productos acuáticos (FAO, 2024b). Perú mantiene históricamente una industria de la anchoveta, siendo

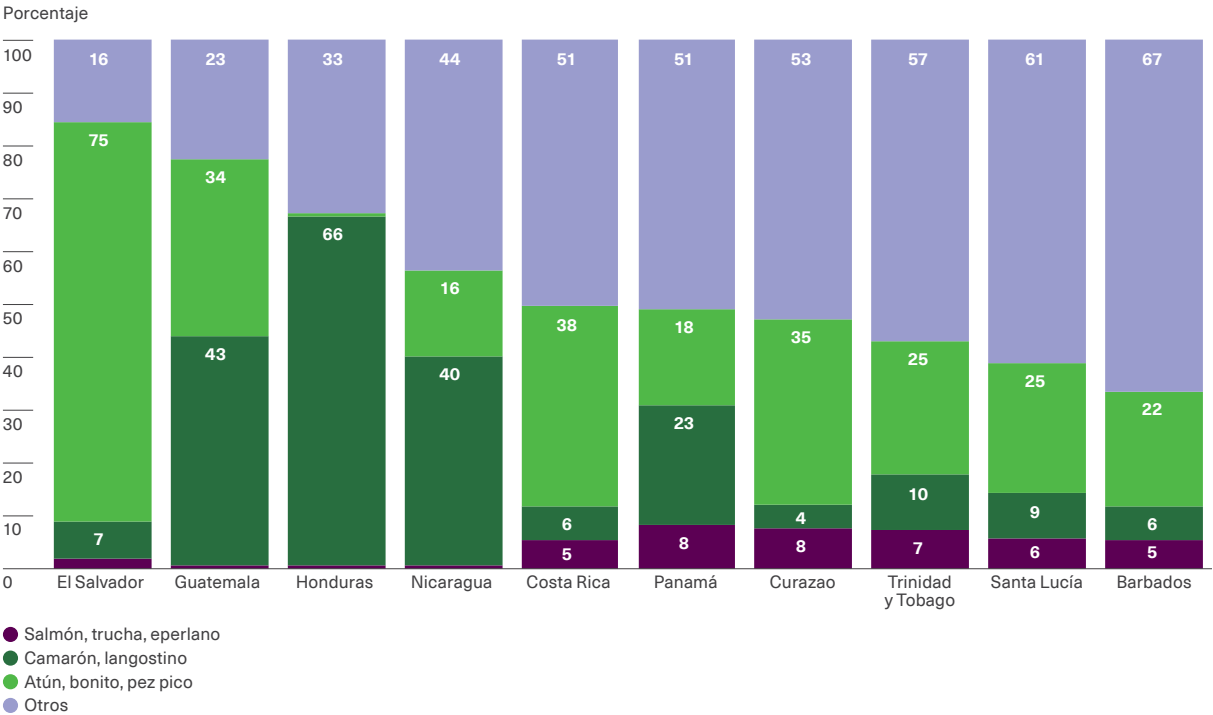
la harina de pescado un producto clave. Con el surgimiento de la acuicultura, la demanda de este producto ha aumentado, dado que es utilizado como insumo para la producción. A pesar de su baja participación en las exportaciones, comparado con Chile y Ecuador, Perú lidera en la región, con un 40 % de la pesca total y un 6 % de la mundial, lo cual se explica por el alto nivel de consumo de pescado per cápita en ese país y su gran tradición gastronómica.

En Centroamérica, solo las exportaciones pesqueras de Honduras y Nicaragua superan el 1 % de su PIB (el 1,2 % y el 1,6 % respectivamente). La producción del sector en el caso de las economías centroamericanas y caribeñas está principalmente destinada al mercado interno, pero exportan productos de alto valor (camarón, langostino, atún, salmón o trucha). El gráfico 5.8 muestra los países de la subregión con mayor

participación de productos pesqueros de alto valor en sus exportaciones pesqueras totales. En Centroamérica destacan El Salvador y Guatemala, con más del 70 % de sus exportaciones en salmones, truchas, eperlanos, camarones y langostinos. Por su parte, Honduras y Nicaragua muestran también una elevada participación de productos de alto valor, predominando los camarones y langostinos.

● ●
La producción del sector en los países centroamericanos y caribeños está principalmente destinada al mercado interno, pero estos exportan productos de alto valor

Gráfico 5.8
Participación en las exportaciones de productos de alto valor en países de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Los totales pueden diferir levemente de 100% por redondeo.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO (s.f.b).

El aspecto rural del sector

Gran parte de la actividad pesquera ocurre en comunidades costeras pequeñas, localidades ribereñas y áreas rurales alejadas de los grandes centros urbanos. La pesca artesanal de pequeña escala comprende a personas que operan con embarcaciones menores o desde la costa, con artes tradicionales, a distancias relativamente cortas de sus pueblos y generalmente en contextos de economía familiar. Esta pesca artesanal está arraigada en las culturas locales y suele organizarse en cooperativas, sindicatos o simplemente núcleos familiares cuyos conocimientos se transmiten de generación en generación. La pesca de pequeña escala representa aproximadamente el 90 % de las explotaciones pesqueras y el 40 % de la producción (FAO, 2024b).



Gran parte de la actividad pesquera ocurre en comunidades costeras pequeñas, localidades ribereñas y áreas rurales alejadas de los grandes centros urbanos

Una gran parte del pescado y marisco que consume la población latinoamericana proviene de la pesca artesanal local. Distintas comunidades aisladas dependen del pescado capturado localmente como fuente de proteína animal accesible (FAO, 2020a; Pedroza-Gutiérrez y Hernández, 2020). Esto otorga a la pesca artesanal un valor estratégico para la nutrición y salud rural, complementando a la agricultura y la ganadería de subsistencia, principalmente en zonas costeras aisladas. Aunque el consumo promedio de productos animales de la pesca en ALC (aproximadamente 10 kg per cápita al año) está muy por debajo de la media mundial (unos 20 kg per cápita al año), en muchas comunidades costeras y ribereñas el pescado es la principal fuente de proteína animal disponible. Perú es la excepción de la región, con un consumo superior a los 20 kg per cápita por año, siendo un país con una gran participación en el mercado de la pesca y una gastronomía destacada a nivel mundial y muy vinculada al sector.

El mundo rural pesquero incluye también las actividades en ríos, lagos y humedales. No obstante, su aporte en volumen al sustento de las comunidades ribereñas

indígenas y campesinas es menor, de aproximadamente el 3 % o el 4 % de las capturas de la región (FAO, 2021b). Por ejemplo, Brasil y México son los países con mayores volúmenes de pesca continental en la región (cada uno supera las 100.000 t anuales). En Brasil, la producción acuícola continental representa el 86 % de la acuicultura total del país, mientras que en Argentina, Bolivia, Colombia, Jamaica, Paraguay y Uruguay alcanza cerca del 100 % (FAO, 2021b).

En términos socioculturales, la pesca rural sostiene modos de vida tradicionales. Las técnicas de pesca artesanal están frecuentemente cargadas de conocimientos ecológicos locales y prácticas ancestrales. Muchas comunidades costeras mesoamericanas o caribeñas combinan la pesca con otras actividades, como la artesanía, el turismo comunitario (por ejemplo, pesca deportiva) o festividades locales. El turismo de pesca sostenible o pescaturismo ofrece múltiples oportunidades a las comunidades rurales, como la conservación de la herencia cultural de los pequeños pesqueros y de los recursos marinos o la diversificación de los ingresos de pequeños productores rurales (Gomei y Bellia, 2019).



Una importante porción del pescado y marisco que consume la población latinoamericana proviene de la pesca artesanal local

El sector pesquero rural mantiene fuertes interrelaciones con la agricultura y otras actividades primarias en ALC. En muchas comunidades rurales, la pesca es una parte más de un sistema de subsistencia diversificado: las familias alternan o combinan esa actividad con la agricultura, la cría de animales menores, la recolección forestal u otras labores del campo. Esta multifuncionalidad es común en zonas costeras rurales, donde, por ejemplo, un núcleo familiar puede dedicarse a la pesca costera durante ciertas temporadas del año y al cultivo en otras. Este rol contracíclico puede intensificarse en zonas donde las actividades primarias se encuentran más amenazadas por los impactos del cambio climático.

Otra interacción clave de la agricultura con la pesca se da a través de los encadenamientos productivos; por ejemplo, mediante el uso de subproductos pesqueros en la alimentación animal y vegetal. Un caso notable es la harina de pescado, proveniente en gran medida de las pesquerías industriales de Perú y Chile, que históricamente se empleó como suplemento proteico alimentario para pollos, cerdos y otros animales de granja. Con el auge de la acuicultura, buena parte de la harina y el aceite de pescado producidos en ALC se exporta para alimentar peces de cultivo, principalmente en Asia (FAO, 2024b). Inversamente, la agricultura provee insumos a la acuicultura: granos, como soya, maíz y trigo, cultivados en Argentina, Brasil o Paraguay, son componentes esenciales de los piensos balanceados para camarones y peces criados en la región.

Existen también externalidades y conflictos entre la pesca y otras actividades primarias, principalmente por la competencia en el uso de recursos naturales. Tanto las camaroneras como la agricultura son responsables de la pérdida de manglares en ALC. Por otro lado, los insumos agrícolas pueden contaminar

ríos, lagos y zonas costeras, produciendo eutrofización⁶, lo que afecta la salud de los ecosistemas pesqueros. Este tipo de impacto ambiental cruzado exige enfoques integrados de manejo de las cuencas hidrográficas y zonas costeras, de manera que agricultores y pescadores coordinen prácticas más sostenibles.

Finalmente, es importante destacar que tanto la pesca artesanal como las demás actividades primarias de pequeña escala comparten retos comunes dentro del desarrollo rural, como los altos niveles de informalidad, la limitada capacidad de negociación en las cadenas de valor y la vulnerabilidad al cambio climático. Esto sugiere que las políticas de desarrollo rural deben considerarlos conjuntamente. Programas de diversificación de ingresos, microcrédito, extensionismo, seguros agropecuarios, etc., pueden tener mayor efecto si incluyen componentes para las personas que trabajan tanto en la agricultura como en la pesca, reconociendo que en muchas comunidades son las mismas familias las que alternan entre una y otra actividad según la temporada y las oportunidades del entorno.

La sobreexplotación de los recursos naturales y las actividades ilícitas

El sector pesquero en ALC enfrenta graves problemas por actividades ilícitas y sobreexplotación, que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y, por ende, su productividad, así como el bienestar de las comunidades rurales que dependen de ellos. En las últimas décadas, se ha observado un aumento preocupante de la presión sobre los recursos pesqueros, tanto de actividades lícitas como ilícitas. A nivel global, alrededor de un tercio de las poblaciones de peces marinos está sobreexplotado o agotado debido al exceso de pesca (FAO, 2024b). ALC engloba cuatro grandes zonas de pesca definidas por la FAO. En la región del sudeste del océano Pacífico, solo un tercio de las poblaciones marinas estaban dentro de la sostenibilidad en 2021, mientras que, en las dos zonas del Atlántico, este valor es cercano al 60 % y solo la región del Pacífico Central-Este muestra un nivel de sostenibilidad cercano al 85 % (FAO, 2024b).

La sobreexplotación está muy relacionada con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Flotas, principalmente extranjeras, han sido detectadas pescando ilegalmente en los límites o dentro de las zonas económicas exclusivas de países latinoamericanos, especialmente en el Pacífico Sur y el Atlántico Sur. Estas actividades INDNR eluden esfuerzos nacionales de conservación y significan pérdidas económicas enormes, estimadas hasta en USD 2.300 millones, incluyendo costos en recaudación, captura y daños ambientales (CLALS American University e InSight Crime, 2022). En el caso de la pesca de captura, pueden causar pérdidas de productividad y potencialmente la desaparición del recurso.

Aunque en menor medida, la pesca informal también afecta la sostenibilidad de ciertos ecosistemas. Algunos pescadores artesanales y comerciales continúan

6 Enriquecimiento excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, en un ecosistema acuático, lo que provoca un crecimiento desmedido de algas y plantas, reduce el oxígeno del agua y disminuye la biodiversidad, afectando gravemente la calidad del agua.

capturando especies prohibidas o reguladas debido a la débil fiscalización. A su vez, aquellos que no cuentan con los artes de pesca apropiados, utilizan técnicas dañinas para el hábitat, disminuyendo la población de peces y la sostenibilidad de su actividad.



La sobreexplotación en la pesca está muy relacionada con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, principalmente de flotas extranjeras

En respuesta a estos desafíos, los países de la región han comenzado a tomar medidas contra la pesca ilegal y la sobreexplotación. Muchos Estados han suscrito tratados internacionales, como el Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) de la FAO, comprometiéndose a cerrar sus puertos a buques sospechosos de pesca INDNR. Asimismo, han fortalecido las regulaciones; por ejemplo, Perú adoptó la recomendación del Comité de Pesca de la OCDE, el cual se compromete a implementar sistemas de trazabilidad y fortalecer esfuerzos para que los subsidios otorgados sean dirigidos únicamente a embarcaciones legalmente autorizadas. En la región también se han creado áreas marinas protegidas y vedas temporales para dar

respiro a las diferentes especies. No obstante, la capacidad de control y vigilancia sigue siendo débil en ALC, principalmente debido a la falta de capital físico, como barcos, drones o capacidad satelital (CLALS American University e InSight Crime, 2022).

En ALC, cerca del 22 % de las aguas marinas territoriales son catalogadas como áreas marítimas protegidas (AMP), siendo la región con mayor presencia de estas zonas. También es la región con la mayor prevalencia de AMP de múltiple uso en el mundo, representando el 48 % de todas sus aguas protegidas (Brassiolo et al, 2023). Estas áreas de múltiple uso buscan conciliar conservación y aprovechamiento sustentable mediante instrumentos como la zonificación, las vedas y restricciones de prácticas y tamaños de captura. Cinti et al. (2025) en un estudio de 11 casos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México encuentran que las AMP gestionadas por la comunidad muestran frecuentemente efectos positivos en la gobernanza de estas áreas y en la participación de las pesquerías de pequeña escala. El rol de los gobiernos debe centrarse en dar apoyo para la capacitación y facilitar sistemas de gestión destinados a las poblaciones locales, reconocer el rol que estas comunidades y los productores desempeñan en la conservación y la pesca sostenible, así como para fiscalizar la presencia de potenciales actividades ilícitas en zonas protegidas.

Oportunidades, desafíos y recomendaciones de política en materia de pesca y acuicultura

Como se menciona en el capítulo 1, la pesca ofrece oportunidades de desarrollo para las áreas rurales, las cuales están determinadas principalmente por tres grupos de acciones. El primero está focalizado en la capacidad de los países de desarrollar su acuicultura y hacerlo de forma sostenible. El segundo está dirigido a mejorar las condiciones laborales de la población local, lo que pasa por mayores esfuerzos para la formalización del empleo en actividades a pequeña escala y la integración en ellas de más mujeres. El tercero procura el aprovechamiento del potencial de la pesca, promoviendo su consumo e integrando esta actividad al turismo y a la gastronomía local, para reforzar la seguridad alimentaria regional y diversificar los ingresos rurales.

Fomentar el desarrollo de una acuicultura sostenible. El principal desafío que enfrenta el sector es el de la sostenibilidad en la captura, la cual está amenazada principalmente por la pesca INDNR, la sobreexplotación de los recursos y la vulnerabilidad al cambio climático. Un desafío adicional en todo el sector es la falta de generación y mantenimiento de datos oficiales y desagregados sobre la actividad en su conjunto y, principalmente, sobre la pesca rural y a pequeña escala. Esta debilidad en los datos dificulta el correcto análisis de la situación y la determinación de prioridades y objetivos para los hacedores de políticas.

La acuicultura se perfila como la actividad con mayor capacidad de crecimiento para satisfacer la demanda alimentaria por su alto contenido nutritivo y su baja huella ambiental, lo que permite aliviar la presión de la sobreexplotación de las pesquerías marinas y oceánicas (FAO, 2024b). Si bien ALC ya es la segunda región acuícola del mundo, su producción se encuentra concentrada en unos pocos países. Existe un gran espacio para que más países latinoamericanos desarrollen cultivos acuícolas, ya sea de peces de agua dulce, moluscos, crustáceos o algas, y los integren en las economías rurales. La FAO (2022c) estima que las Américas, incluyendo a Canadá y Estados Unidos, será la región donde más aumente la producción pesquera, particularmente en Chile, cuya producción puede crecer más de un 30 % entre 2020 y 2030.

Las políticas en este ámbito deben enfocarse en la transferencia de tecnología, el financiamiento y la capacitación para pequeños y medianos acuicultores. La llamada “transformación azul”, promovida por la FAO, y la estrategia de economía azul de CAF van en esta línea, buscando intensificar la acuicultura de forma sostenible para beneficiar a comunidades necesitadas (CAF, 2025b; FAO, 2024b).

Incrementar el consumo interno de pescado representa una oportunidad para mejorar la nutrición de la población latinoamericana y caribeña y fortalecer los mercados intrarregionales. Aunque ALC es un exportador neto de productos del mar, el consumo interno es bajo en muchas de sus poblaciones, excluyendo a Perú. Políticas en este ámbito incluyen campañas de educación nutricional, resaltando los beneficios del pescado, o programas de alimentación escolar que incorporen productos locales. Estos esfuerzos pueden simultáneamente elevar los ingresos de los pescadores artesanales al ampliar su mercado doméstico, así como mejorar la seguridad alimentaria de los países de la región.



Acción CAF.
Escanea el QR para conocer más sobre el impacto de CAF en la economía azul.



Las principales oportunidades de la pesca y la acuicultura se perciben en el crecimiento de la acuicultura sostenible, la formalización del empleo, la integración de la mujer en todas las etapas de la cadena de valor y la promoción de los beneficios nutricionales de la pesca

Asegurar el futuro de la pesca de captura pasa por recuperar y conservar las poblaciones de peces. Se requieren políticas firmes de ordenación pesquera basadas en la ciencia, que establezcan cuotas de captura acordes con el rendimiento máximo sostenible, vedas biológicas en épocas de reproducción y control del esfuerzo pesquero (número de barcos, técnicas permitidas, etc.). Chile, por ejemplo, desde los años 90, ha implementado sistemas de cuotas. México tiene casos exitosos a nivel local, como la pesquería de langosta roja de Baja California, gestionada por cooperativas, que fue la primera pesquería artesanal del mundo certificada con el sello del Marina Stewardship Council (MSC) de sostenibilidad y que continúa operando de forma sustentable décadas después (MSC, 2022). Las políticas que promueven esquemas de cooperativismo pesquero reconocen además derechos de uso a las comunidades locales.

Será necesario eliminar o disminuir significativamente la pesca ilegal para que los esfuerzos en los ámbitos anteriores sean eficientes. Aquí las políticas deben enfocarse en fortalecer la vigilancia y la disuasión. Una oportunidad está en la modernización de la tecnología de monitoreo, lo cual incluye sistemas de rastreo satelital en embarcaciones, patrullaje con drones y radares costeros (CLALS American University e InSight Crime, 2022), e iniciativas globales como el Global Fishing Watch, que proveen datos abiertos de posicionamiento de flotas. Varios países de ALC han comenzado a colaborar en patrullajes conjuntos y compartir información de inteligencia para interceptar buques ilegales. Continuar por esa senda, implementando el Acuerdo de Estado Rector de Puerto, que impide desembarques de pesca INDNR, y aplicar sanciones ejemplares

son políticas disuasorias necesarias. Estos esfuerzos implicarán la inversión en infraestructura y tecnología de monitoreo, así como la capacitación de los funcionarios para el uso de estas herramientas.

Una amenaza adicional para el sector es su vulnerabilidad al cambio climático. Esto conlleva aumentos de la temperatura del mar, acidificación, cambios en los patrones de las corrientes o tormentas más intensas que amenazan a los pescadores. Por tanto, las políticas de desarrollo pesquero deben incorporar la adaptación climática como un pilar clave. Esto incluye sistemas de alerta temprana y refugios climáticos para huracanes, seguros contra eventos extremos, diversificación de especies objetivo con otras más resistentes o que migran a nuevas áreas y capacitación e integración de los pescadores en los planes de manejo costero resiliente, como la restauración de manglares y arrecifes, dos biomas que sirven de barrera natural.

El desarrollo del sector pasa también por cerrar brechas rurales en infraestructura básica, condiciones laborales y de vulnerabilidad. Esto es especialmente importante para pesqueros pequeños y artesanales, que, en algunos casos, carecen de muelles seguros, almacenaje refrigerado, acceso a electricidad estable, mercados locales o caminos adecuados para transportar lo producido. El desarrollo de mercados locales, el almacenamiento en frío y la conectividad vial y digital permitiría reducir el elevado desperdicio poscaptura, que, según la FAO (2011), representa cada año cerca del 35 % de la producción del sector.

Por otro lado, es crucial extender la protección social a los pescadores, con esquemas de seguros contracíclicos, seguros de vida y salud, así como incluirlos en los sistemas de pensiones. Algunos países, como Brasil con el “Seguro Defeso”⁷, han comenzado a implementar estas políticas. Este programa muestra que la exposición de los hogares a sus prestaciones aumenta la matriculación de los niños en las escuelas y se asocia con una mejor calidad de la vivienda de las personas beneficiarias y con un menor porcentaje de jóvenes desempleados y sin estudios (FAO, 2022c). La formalización de los pequeños pesqueros es un paso previo necesario, tanto para mejorar los ingresos y condiciones laborales de los trabajadores como para incluirlos en los sistemas de protección y seguros.



Las principales amenazas para el subsector son la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como los impactos actuales y potenciales del cambio climático

Muchas comunidades rurales enfrentan vulnerabilidades por depender de unos pocos recursos estacionales de la pesca o la agricultura. Algunas familias migran temporalmente, lo cual transforma los ritmos de vida y la organización comunitaria. En este contexto, se alerta sobre la falta de adecuación de las políticas crediticias. Los créditos convencionales no contemplan los meses de veda ni las fluctuaciones propias de la actividad, lo que produce endeudamientos regresivos que afectan especialmente a quienes están en mayor situación de informalidad (RedLAC y CAF, 2025).

Finalmente, uno de los grupos más vulnerables, por su invisibilización y la prevalencia del empleo informal e incluso no remunerado, son las mujeres rurales. En 2013, la FAO publicó sus buenas prácticas para eliminar las desigualdades de género en las cadenas de valor pesqueras (FAO, 2013a). Entre esas prácticas se encuentran la legislación específica sobre equidad de género, el apoyo en el acceso a la tierra y a los recursos necesarios para la pesca, la capacitación, la mejora en los sistemas de información y monitoreo, las mejoras en la seguridad e higiene laboral, la eliminación del trabajo infantil y la promoción de la acción colectiva liderada por mujeres.

El turismo de playa o pesquero son una oportunidad en auge en algunas áreas costeras. Pescadores artesanales pueden ofrecer excursiones, pesca deportiva o ecoturismo, mientras que las zonas costeras también pueden desarrollar su industria gastronómica promoviendo la venta de pescado fresco, actividades que generan ingresos adicionales a las comunidades rurales costeras.

Se debe, asimismo, incentivar la agregación de valor a los productos del sector. Actualmente, gran parte de la pesca artesanal se vende como producto fresco de bajo precio al intermediario, práctica que también es responsable de los desperdicios de esta industria, al depender de métodos rudimentarios de limpieza

⁷ Es un seguro que beneficia personas que viven de la pesca artesanal en los periodos en los que la actividad está prohibida o restringida.

y, en general, no contar con métodos modernos de almacenamiento. Los apoyos en capacitación y las pequeñas inversiones pueden fomentar el desarrollo

de microempresas de procesamiento (como ahumados, conservas, empaque al vacío, etc.), obteniendo mejor rentabilidad.

Sector del turismo

La relevancia del sector en América Latina y el Caribe y su vínculo con la ruralidad

El turismo es una actividad económica de importancia para ALC, donde emplea a aproximadamente el 1 % de la población. El sector cobra particular relevancia en el Caribe y Centroamérica, debido principalmente a su fortaleza para el turismo de playa. En las Bahamas, por ejemplo, el 10,83 % del empleo se concentra en este sector, mientras que en Barbados alcanza el 6,19 %. El gasto de los turistas constituye también una fuente importante de ingresos para las comunidades y el Estado. En cuanto al gasto de los turistas en la región, se observan varios países del Caribe y América Central donde este indicador representa entre 1,6 % del PIB hasta casi 60 %, mientras en Suramérica los números varían entre el 0,3 % del PIB y un máximo del 3,8 %.



Aproximadamente 1 % de la población de América Latina y el Caribe trabaja en el sector del turismo

El turismo rural es parte de las prioridades de los gobiernos, de acuerdo con datos de la Primera Encuesta de Turismo Rural realizada por ONU Turismo (2023). Esta priorización se manifiesta en la mayoría de los países a través de programas públicos de promoción del sector, concretamente del turismo rural y comunitario. Este se define como una “modalidad turística que tiene lugar en zonas rurales, donde asociativamente las comunidades locales ejercen el liderazgo sobre su desarrollo y gestión” (Gandolfi y Ramírez, 2025). Este tipo de turismo tiene, por tanto, la característica de ser gestionado en comunidad, excluyendo el manejo por una sola persona o familia.

La importancia del turismo rural y comunitario está documentada en algunos países de la región (ver el recuadro 5.6) y su importancia relativa al turismo total se estima, con base en documentos de Ministerios de Turismo, en el 15 % para Colombia, el 18 % para Perú y el 20 % para Costa Rica (Gandolfi y Ramírez, 2025).

Organizaciones internacionales, como ONU Turismo, se sumaron a la priorización de ese subsector al declarar 2020 como “Año del turismo y el desarrollo rural”, cuyo foco era generar el desarrollo a través del turismo (ONU Turismo, 2024). Con ese impulso ha surgido también el programa Best Tourism Villages (mejores pueblos turísticos), que reconoce destinos rurales sobresalientes.

Las agencias internacionales y los gobiernos ven en el turismo rural una herramienta para reducir brechas de infraestructura, servicios básicos e ingresos. Por otra parte, el 54 % del empleo en turismo es femenino, convirtiéndose también en una potencial herramienta de empoderamiento económico de las mujeres (ONU Turismo, 2021).

Los países de ALC poseen una importante riqueza natural y cultural, lo que podría considerarse como una ventaja competitiva en el mercado turístico rural. En la región se concentra cerca del 50 % de la biodiversidad conocida del planeta, a pesar de ocupar solo el 16 % de la superficie terrestre. Además, cuenta con el 25 % de los bosques mundiales y el 30 % de los recursos hídricos renovables (Banco Mundial, 2022a).

Recuadro 5.6

La creciente importancia de las actividades relacionadas con la ruralidad en el turismo

Entre 2010 y 2019, los ingresos por turismo internacional en ALC crecieron un 71 %, pero la situación creada por el COVID-19 en 2020 provocó una caída de hasta el 63 % en los ingresos turísticos (BID, 2022). La cantidad de visitantes internacionales en ALC superó en 2023 los niveles de 2019 y se estima que siguió aumentando en 2024 (ONU Turismo, 2025).

Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, los arribos internacionales en 2024 superaron en un 7,9 % los niveles del año anterior (ONU Turismo, 2025). Además, se prevé la creación de alrededor de 8 millones de empleos en la próxima década (WEF, 2025).

Existe evidencia de que los viajeros buscan cada vez más experiencias que les permitan conectar directamente con la cultura y la naturaleza de los destinos.

Recientes informes de Booking.com (2025) indican que el 77 % de los viajeros busca experiencias auténticas, representativas de la cultura local. También, hay una creciente deseo por hacer viajes más sostenibles, lo que podría impulsar el ecoturismo. Esta tendencia está respaldada por estudios del Banco Mundial (2019), que evidencian una creciente predisposición de los viajeros a invertir en experiencias culturales únicas en destino, en detrimento del gasto tradicionalmente asignado a los servicios hoteleros. Según la Unesco (2021) el 40 % del turismo total puede catalogarse como turismo cultural. Por su parte, Gandolfi y Ramírez (2025) afirman:

Desde la postpandemia, ha crecido significativamente el interés por las experiencias culturales auténticas. Según el informe de Euromonitor International sobre turismo cultural, en 2022 un 65 % de los viajeros incluyó actividades culturales en sus itinerarios; esta cifra aumentó al 72 % en 2023 y se proyecta que alcanzará el 78 % en 2024. Además, los turistas están dispuestos a pagar hasta un 20 % más por servicios y productos que promuevan tradiciones locales, lo que refleja una preferencia cada vez mayor por los viajes experienciales y las vivencias locales. El informe destaca que los viajeros culturales prefieren alojamientos con una atmósfera auténtica y local, como casas rurales, haciendas o pequeños hoteles boutique (25 %). Una parte considerable de su presupuesto se destina a la gastronomía regional, eligiendo restaurantes tradicionales y mercados locales para degustar la cocina autóctona (40 %). También otorgan un alto valor a las actividades culturales, como talleres de artesanía, clases de cocina y recorridos históricos, que representan un 35 % del gasto total. Según la encuesta de Euromonitor, el gasto promedio de los viajeros en actividades culturales y productos locales aumentó un 18 % entre 2022 y 2023, y se estima que crecerá otro 20 % en 2024.

Estas tendencias muestran que un alto porcentaje de turistas da prioridad a la interacción con el patrimonio natural y cultural de las comunidades que visitan, lo que aumenta la demanda de destinos en ALC, donde los visitantes pueden integrarse en la vida cotidiana local, conocer tradiciones ancestrales y disfrutar de entornos naturales poco concurridos.



Acción CAF.
Escanea el QR para conocer más sobre
las guías de inversión en turismo
elaboradas por CAF.



La región alberga alrededor del 50 % de la biodiversidad conocida del mundo, pese a ocupar solo el 16 % de la superficie terrestre

En lo cultural, la región destaca por contar con 147 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, que incluyen desde yacimientos arqueológicos prehispánicos y centros históricos coloniales hasta paisajes naturales (Unesco, 2025). Gran parte de estos sitios se ubican en zonas rurales gestionadas por comunidades locales. En ALC viven alrededor de 42 millones de personas indígenas, junto con comunidades afrodescendientes y mestizas que conservan más de 560 lenguas y tradiciones únicas (Banco Mundial, 2022a). Este patrimonio cultural aporta autenticidad y valor a la oferta turística.

Programas internacionales, como Mejores Pueblos Turísticos, de ONU Turismo, han reconocido a pueblos latinoamericanos que se destacan en turismo sostenible y desarrollo comunitario. En la edición de 2024 hubo pueblos ganadores en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú.

Los principales desafíos para mejorar el turismo rural, identificados por las autoridades del sector de los distintos países, pueden observarse en el cuadro 5.5. Al priorizar los desafíos en siete categorías, se observa que “infraestructura” es la más prioritaria, seguida de “población y economía”.

Dentro de la categoría de infraestructura, los principales desafíos se encuentran en la provisión de servicios básicos, como agua potable, tratamiento de aguas residuales y electricidad; a continuación, aparecen las deficiencias en infraestructura de acceso a áreas rurales, como carreteras, puertos, aeropuertos y otras instalaciones.

En cuanto a la categoría de población y economía, los principales desafíos son la desigualdad en ingresos económicos en las áreas rurales y la limitada participación de las minorías o de grupos vulnerables.



América Latina y el Caribe cuenta con 147 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco

El análisis del turismo rural⁸ como subsector tiene la dificultad de la falta de información estadística. No solamente no existen datos armonizados y comparables para los países, sino que incluso en la mayoría de ellos no se recolectan. La Primera Encuesta de Turismo Rural (ONU Turismo, 2023), muestra que la disponibilidad de datos básicos sobre este subsector en la región es limitada. De los 18 países latinoamericanos que respondieron⁹, sólo cuatro¹⁰ (22 % del total) reportaron recolectar datos de la cantidad total de visitantes para el turismo rural. Otras variables, como turistas por día, cantidad de ellos que pernoctan o gasto por visitante, también tuvieron un porcentaje de respuesta bajo (entre tres y cinco países en la región).

8 ONU Turismo define al turismo rural como “una actividad turística en la que la experiencia del visitante se relaciona con una amplia gama de productos, generalmente vinculados a actividades en la naturaleza, la agricultura, los modos de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés”. Además, explica que las “actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las siguientes características: 1) baja densidad de población; 2) paisajes y territorios donde predominan la agricultura y la silvicultura; y 3) estructuras sociales y modos de vida tradicionales”.

9 Los países que respondieron la encuesta son Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

10 Bahamas, Cuba, Honduras y Paraguay.



Mercado en Chinchero, Perú.

Cuadro 5.5
Prioridades de los principales desafíos (cantidad de países)

		Infraestructura	Población y economía	Recursos humanos y entrenamiento	Gobernanza y mecanismos financieros	Recursos naturales y culturales	Destinos, productos turísticos y ambiente de negocios	Digitalización y tecnologías de la información
Prioridad en la clasificación (1 es el de mayor prioridad)	1	 (6)	 (3)	 (1)	 (2)	 (2)	 (2)	 (1)
	2	 (6)	 (3)	 (2)	 (1)	 (2)	 (0)	 (3)
	3	 (1)	 (3)	 (6)	 (2)	 (3)	 (2)	 (0)
	4	 (2)	 (3)	 (0)	 (7)	 (2)	 (1)	 (2)
	5	 (0)	 (3)	 (3)	 (1)	 (2)	 (6)	 (2)
	6	 (0)	 (1)	 (3)	 (4)	 (1)	 (3)	 (5)
	7	 (2)	 (1)	 (1)	 (0)	 (5)	 (3)	 (4)
Clasificación promedio		2,53	3,41	3,94	3,94	4,35	4,76	4,88

Nota: Las clasificaciones podían ir del 1 al 7, siendo 1 la prioridad más alta, y no se permitía que dos temas tuvieran la misma clasificación. Cada casilla del cuadro refleja el número de países (representados en número entre paréntesis y círculos) por prioridad y desafío.

Fuente: ONU Turismo (2023).

La misma encuesta revela que los principales desafíos para recolectar este tipo de información son las restricciones presupuestarias y la disponibilidad de tecnología para obtener, procesar y analizar los datos (el 66,7 % de los países responde en ese sentido para ambas variables). Otros retos son el limitado conocimiento de la tecnología más actual usada en el campo (55,6 %), la falta de entrenamiento, educación y

habilidades entre los proveedores de turismo rural para recolectar los datos (50 %) y la limitada capacidad y conocimiento de las autoridades locales y organizaciones administradoras de los locales de destino (50 %). Todos los países de la región menos uno afirmaron necesitar ayuda técnica, presupuestaria o ambas para recolectar y analizar datos de turismo rural.

Programas de turismo rural y comunitario en la región

Gandolfi y Ramírez (2025) analizan los efectos de nueve programas de turismo rural y comunitario en ALC¹¹ (ver el cuadro 5.6). Estos programas, salvo el chileno que data de 1995, surgieron en la región a fines de la primera década del siglo actual y la mayoría tuvieron seguimiento en el tiempo. Sin embargo, varios de ellos perdieron prioridad por la pandemia del año 2020.

Cuadro 5.6
Programas de turismo rural y comunitario en América Latina y el Caribe

País	Nombre del programa	Entidades estatales líderes	Años de implementación
Argentina	Red Argentina de Turismo Rural Comunitario	Ministerio de Turismo de la Nación	2009-2017
Bolivia	Programa Nacional de Turismo Comunitario	Viceministerio de Turismo	2011-2017
Chile	Programa Nacional de Turismo Rural	Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP)	1995-2010
Colombia	Estrategia Nacional de Turismo Comunitario	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)	2012-Actualidad
Costa Rica	Programa de Apoyo a Mipymes Turísticas (incluye turismo rural y comunitario)	Instituto Costarricense de Turismo (ICT)	2009-Actualidad
Jamaica	Rural Economic Development Initiative I & II	Ministry of Tourism, Jamaica Social Investment Fund	2017-Actualidad
Paraguay	Plan Nacional de Turismo Rural Comunitario	Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)	2013-2023
Perú	Estrategia Nacional de Turismo Comunitario	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)	2007-Actualidad
República Dominicana	Programa de Turismo Comunitario Sostenible (TCS)	Ministerio de Turismo (MITUR)	2016-Actualidad

Fuente: Gandolfi y Ramírez (2025).

El gasto total en estos nueve programas no superó los USD 55 millones, con iniciativas que costaron desde menos del millón de dólares hasta la más grande, que se dio en Bolivia, por USD 16 millones. Con el tiempo, se observó un crecimiento en los montos de los programas. De los nueve analizados, cinco tuvieron financiamiento de la cooperación internacional (CAF, BID, Banco Mundial, las agencias de cooperación española y japonesa).

11 El estudio fue encargado para esta edición del RED y en este subapartado se destacan los principales hallazgos.

Los programas de turismo rural y comunitario no se crearon solamente con el objetivo de diversificar o aumentar la oferta del sector, sino que muchas veces tenían como objetivo el desarrollo comunitario. Ese es el caso de siete de los nueve programas.

Las personas entrevistadas por Gandolfi y Ramírez (2025) afirman que los programas generaron diversos efectos positivos en las comunidades, con impacto económico, sociocultural, medioambiental y de inclusión.

Entre los varios efectos positivos, aquellos que tuvieron mayor consenso entre los entrevistados

fueron la generación de ingresos adicionales a las actividades tradicionales; un efecto derrame, que incluye no solo a los directamente involucrados en la actividad turística; la generación de empleo joven y femenino; y la revitalización de costumbres y tradiciones locales. Además, se destacaron algunos efectos de largo plazo, como las mejoras en educación, ya que el incremento de los ingresos de las familias permitió el financiamiento de la educación terciaria de los hijos. Además, la formación y desarrollo de capacidades generaron el fortalecimiento del liderazgo local y el turismo actuó como catalizador para mejorar infraestructura básica.

Relacionamiento con la agricultura u otros sectores rurales

Existe consenso en que el turismo, cuando se orienta a exaltar los valores locales, sirve de incentivo para la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de las comunidades. Un ejemplo destacado es la península de Yucatán (México), donde el turismo en torno a sitios arqueológicos, como Chichén Itzá, y la participación de comunidades mayas en la cadena de valor han fortalecido la protección del patrimonio cultural y natural (Peraza et al., 2023). De forma similar, en el Eje Cafetero colombiano, el turismo cultural ha impulsado la conservación de paisajes y fincas tradicionales, reconocidos por la Unesco (Duis, 2007).



El turismo, cuando se orienta a exaltar los valores locales, sirve de incentivo para la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de las comunidades

En general, cuando los bosques, paisajes y tradiciones se convierten en atractivos turísticos (como parques, reservas o manifestaciones culturales), generan ingresos y orgullo local que favorecen su preservación. En Venezuela, a través

de la Fundación Andes Tropicales, se desarrolló el Programa Andes Tropicales (PAT). Este buscó generar un modelo de turismo comunitario dirigido al fortalecimiento de la actividad turística asociada a la ganadería y la agricultura (principalmente del café), mediante el diseño de rutas asociadas al producto Mucuposadas. Posteriormente, el PAT centró esfuerzos en la Gran Sabana y el Delta del Orinoco para el desarrollo de circuitos turísticos vinculados a la artesanía, las tradiciones autóctonas y la conservación del medio ambiente. La ejecución de este programa trajo efectos positivos relacionados con la diversificación de ingresos; el desarrollo de pequeños encadenamientos productivos; la creación de empleo local con un fuerte componente de género; el empoderamiento de las comunidades; la conservación del patrimonio y los recursos naturales y, finalmente, la resiliencia, mediante la generación de ingresos para las comunidades en épocas adversas para la actividad productiva. El PAT tuvo apoyo de CAF y su modelo migró a Bolivia y Argentina.

Oportunidades de desarrollo y políticas para el turismo rural

Se debe mejorar la estadística sobre el turismo rural. Este punto ha sido enfatizado a lo largo del documento para diversas áreas, pero, en el caso del turismo rural, la escasez es aún más grave. En muchos países, ni siquiera se recolectan los datos. Asociado a esto está la insuficiencia de estudios de impacto de los programas de turismo rural y comunitario que hagan una evaluación completa de los costos y beneficios.

Invertir en turismo rural es invertir en las necesidades de la población local. Los principales desafíos, de acuerdo con los participantes de la Primera Encuesta de Turismo Rural realizada por ONU Turismo, son infraestructura de conectividad y servicios básicos. Esto se aplica no solo a los turistas, sino también a quienes viven en las comunidades rurales. Por ello, sería importante que las inversiones públicas en infraestructura y servicios básicos tengan en cuenta en sus análisis de prioridades y beneficios los potenciales beneficios del turismo.

Los presupuestos deben ser acordes con los objetivos de los programas. Varios de los programas tenían una duración larga y objetivos ambiciosos, poco coherentes con el presupuesto asignado. El gasto total de los nueve programas analizados por Gandolfi y Ramírez (2025) no superó los USD 55 millones, con cifras que oscilaron entre menos del millón de dólares hasta el programa más grande,

de USD 16 millones. Considerando que, en países como Colombia, Costa Rica y Perú, el turismo rural y comunitario representó entre el 15 % y 20 % del turismo total, estos programas parecen estar subfinanciados y deberían recibir un mayor apoyo de los gobiernos.



El fortalecimiento de la conectividad eléctrica, digital y móvil en las zonas rurales mejora las condiciones de vida de sus habitantes y constituye un factor clave para el desarrollo del turismo

Es preciso adoptar una perspectiva de largo plazo. La comparación entre países revela que aquellos que han implementado programas de turismo rural y comunitario con una perspectiva de mediano y largo plazo tienden a generar impactos más profundos y sostenibles. Tal es el caso de Bolivia, Costa Rica y Paraguay, donde programas con más de 12 años de ejecución han alcanzado, según los resultados de Gandolfi y Ramírez (2025), impactos significativos en las dimensiones sociocultural, ambiental, económica y de inclusión.

Hoja de ruta para fortalecer los sectores forestal, pesquero y turístico rural

A lo largo del capítulo se han descrito los principales desafíos y oportunidades en tres sectores fundamentales para las economías en el mundo rural. Además de mejoras para recabar datos más precisos y desagregados en cada uno de los sectores, existen un conjunto de políticas que ayudarían

a fortalecer los tres sectores y mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales. La figura 5.2 presenta una hoja de ruta que sintetiza la situación y medidas clave que se pueden tomar para lograrlo en cada uno de los sectores analizados.

Figura 5.2
Oportunidades, desafíos y recomendaciones de política

